

UC Santa Cruz

Reprint Series

Title

Entre el estado y el mercado: Perspectivas para un desarrollo rural autonomo en el campo mexicano

Permalink

<https://escholarship.org/uc/item/07x9z7jb>

Authors

Fox, Jonathan A
Gordillo, Gustavo

Publication Date

1989-10-01

Peer reviewed

y el huevo. El primero tuvo una pérdida de importancia dentro del gasto alimentario en el periodo analizado que, sin embargo, no repercutió en la cantidad comprada, ya que incluso ésta se incrementó en la mayoría de los estratos. Aquí se observó el efecto del precio subsidiado de LICONSA actuando positivamente.

En cambio, el huevo muestra el fenómeno opuesto. A este producto se le fue destinando un mayor porcentaje del gasto alimentario y, sin embargo, la cantidad adquirida fue mucho menor.

ENTRE EL ESTADO Y EL MERCADO: PERSPECTIVAS PARA UN DESARROLLO RURAL AUTÓNOMO EN EL CAMPO MEXICANO

JONATHAN FOX* Y GUSTAVO GORDILLO**

¿Quién debe dominar la distribución de recursos: el Estado o el mercado? Esta pregunta se ha hecho presente por mucho tiempo en las discusiones sobre el desarrollo de México. Desde 1968, un gran número de componentes sociales han incrementado su capacidad para articular sus intereses con autonomía relativa del Estado, desafiando así su monopolio tradicional y las "reglas de juego" para la toma de decisiones políticas, sociales y económicas. Este estudio demuestra cómo los campesinos mexicanos han intentado democratizar el proceso de desarrollo rural cambiando sus términos de comercialización tanto con el Estado como con el mercado, mediante la creación de iniciativas económicas más representativas y autónomas.

Interpretaciones convencionales de los movimientos sociales mexicanos presentan como dos categorías excluyentes entre sí a la "oficial", o controlada por el gobierno, y a la "independiente", comúnmente vista como una oposición abierta al gobierno. Los cambios en el movimiento campesino en los años ochenta hicieron obsoleto este enfoque antagonístico. Las acostumbradas fuerzas de represión y coacción del Estado continuaron dividiendo y conquistando los movimientos sociales, en particular al campesinado; no obstante, este estudio sugiere la pertinencia de analizar a las organizaciones sociales mexicanas en un mar-

* Profesor asistente del Departamento de Ciencias Políticas, Instituto Tecnológico Massachusetts.

** Investigador visitante, Centro de Estudios E.U.-México, Universidad de California, y director Maestría en Derecho Regional, Universidad Autónoma de Zacatecas. Traducción inglés-español: Manuel Rodríguez Posse.

co de referencia en el cual los *grados* de autonomía son la fórmula crucial.¹ La "autonomía" es un concepto relativo que se define aquí como la capacidad de un grupo para tomar decisiones internamente, sin intervención externa, respecto a medios y fines.² Bajo este criterio, la independencia organizativa evidente representa un extremo dentro de toda una continuidad, una opción política tomada por agrupaciones rurales que tienen una autonomía elevada frente al Estado, aunque no necesariamente en relación con los partidos políticos de oposición.

¿Cuáles son las principales características del movimiento campesino mexicano a mediados de los años ochenta y cuáles son sus perspectivas futuras de participar en el proceso de desarrollo? Mientras las decisiones para el desarrollo nacional sigan dando prioridad a la restauración de la confianza al inversionista privado, virtualmente no habrá espacio político alguno para expandir la redistribución de la tierra a gran escala, aun cuando la población desposeída de tierra sea en la actualidad mayor que cuando estalló la Revolución de 1910. Los principales partidos de oposición actúan en su mayoría en zonas urbanas, y las organizaciones campesinas más independientes son débiles y están divididas (con algunas excepciones regionales). Es por ello que muchos observadores concluyen que, en esencia, no existen en el horizonte del movimiento campesino mexicano perspectivas positivas.

Desde principios de los años setenta, sin embargo, las grandes movilizaciones campesinas, con fuerte apoyo de sus bases, han creado un importante espacio político para la consolidación potencial de un "sector democrático-social" de empresas rurales de autogestión.³ Muchas de estas empresas se limitan a procesar y vender sus cosechas, pero otras se benefician con los productos y servicios a los campesinos sin tierra y extremadamente pobres de sus mismas comunidades. Dadas las restricciones impuestas por la crisis, creemos que las perspectivas

¹ El estudio de Roxborough sobre los sindicatos mexicanos independientes anticipó un enfoque paralelo (1984).

² Los límites entre interno y externo son con frecuencia borrosos en la práctica. Desgraciadamente, la ciencia social tiene todavía que crear normas precisas para poder analizar las dinámicas de cambio en los *grados* de autonomía de la organización social.

³ "Democrático" es también un concepto relativo, definido como una síntesis de la representación y responsabilidad de la dirección con la participación de las masas en la toma de decisiones. Para una elaboración futura de estos dos "axiomas" sobre la organización de la democracia ver Fox (1987). Por razones de espacio este trabajo se concentra en los grupos como unidad fundamental para el análisis. En estos momentos, un proyecto de investigación se centra específicamente en las dinámicas de participación rural que se desenvuelven dentro de las organizaciones económicas en el campo mexicano.

futuras de las fuerzas políticas campesinas representativas e independientes en México dependerán, en gran medida de la consolidación de una base material relativamente autónoma que permita la articulación y defensa de los intereses del campesinado tanto frente al Estado como frente al mercado.⁴

Este estudio comienza con un esbozo general de la relación entre el sector sociorural y la crisis económica nacional en las últimas décadas de interacción del movimiento Estado-campesinado. El análisis aborda la discusión sobre las estructuras de poder regional, el incremento de la movilización campesina a principios de los años setenta y el variable terreno de conflicto en los años ochenta.

LA CRISIS ECONÓMICA Y EL SECTOR SOCIAL RURAL

El sistema político que toma las decisiones para el desarrollo de México ha estado tradicionalmente dominado por un proceso de negociación en el cual el Estado hace concesiones materiales selectivas a grupos de intereses organizados a cambio de, por lo menos, una subordinación política nominal. Sin embargo, tras la pérdida del campo de acción presupuestario que sufrió el Estado después de 1982, se ha hecho cada vez más difícil el método de "divide y vencerás" dentro de las fuerzas sociales con concesiones materiales.⁵ Como la continua crisis económica se resiste a los tradicionales acuerdos de negociación corporativista, el Estado se ve cada vez más frente a la disyuntiva de permitir una participación más plural en la toma de decisiones, por lo menos de algunos grupos movilizados, o ejercer una coacción mayor sobre los grupos sociales considerados anteriormente como sus aliados

⁴ Si bien los intereses materiales inmediatos de los campesinos varían claramente dependiendo de su acceso a la tierra y al capital, nosotros pensamos que la mayoría rural comparte un interés común en la democratización de la política gubernamental y en el suministro de recursos al campo. Para un análisis definitivo del campesinado mexicano, ver CEPAL (1982). Ver también Paré, 1977.

⁵ La actual crisis económica tiene sus orígenes en el fracaso del *boom* petrolero de 1978-1982 en México, que combinó elementos contradictorios de reforma nacionalista y subsidio masivo del gasto del sector público y privado. Desde entonces, la mayoría de los intentos parciales del gobierno para promover la industrialización y la autosuficiencia en granos han fracasado. La crisis de 1982 se identifica ampliamente con el "último jadeo" del tradicional proyecto de reforma estructural de México, con carácter "nacionalista-estatista", resaltando notablemente la nacionalización del sistema bancario mexicano. Las presiones internacionales fortalecieron las corrientes políticas del gobierno predispuestas a organizar una retirada gradual pero estable en la regulación estatal del capital privado.

(por ejemplo: los beneficiados con la reforma agraria, los industriales etcétera). Después de años de austeridad, lo único que le queda al Estado para dar es el poder mismo: el derecho a una participación autónoma y democrática, pero, ¿cómo y a quién?⁶

Las discusiones sobre la crisis se han centrado generalmente en el análisis de la pareja gobierno-iniciativa privada; entonces, ¿qué ha significado la crisis para los participantes de la economía que no encajan en las categorías convencionales de "Estado" y "mercado"? La Constitución Mexicana de 1917 considera que las relaciones de propiedad deben estar definidas socialmente: la tierra, el agua y el "subsuelo" son recursos nacionales. A partir de una enmienda constitucional, en 1983 se organizó la propiedad en tres categorías definidas como iguales: estatal, privada y social.⁷ El sector social está compuesto por empresas que son propiedad de y están dirigidas por los sindicatos, las cooperativas, y las organizaciones campesinas. Como consecuencia de la intervención sistemática del Estado en los asuntos internos de estas organizaciones sociales, muchas empresas que pertenecen al sector social son controladas en la práctica por él. En este trabajo, por tanto, se usa el término "sector democrático-social" para referirse a aquellas empresas de autogestión relativa.

¿Cuáles son los perfiles del "sector social" en el campo? La Revolución Mexicana produjo una de las reformas agrarias más extensas en el mundo en vías de desarrollo no socialista. Con un modelo desigual vagamente relacionado a los ciclos de protesta del campesinado, el Estado ha asignado aproximadamente 50% de la poco común tierra fértil de México a las comunidades agrarias reguladas por el gobierno (los ejidos y las *comunidades agrarias*).⁸ Los ejidos son los pilares del "sector social" rural, y su actual debilidad económica constituye el reto más serio desde la resistencia armada de los terratenientes en los años treinta. Algunos ejidos han sido virtualmente abandonados por

⁶ Este dilema subraya el debate mexicano contemporáneo sobre el significado real de la consigna para la campaña presidencial de 1988 de "modernización política".

⁷ La modificación que hace constitucionalmente compatibles a la propiedad privada y al Estado es parte del esfuerzo general de la administración —infructuoso por demás— para evitar la fuga de capitales y restaurar la confianza en las inversiones después de la nacionalización de la banca privada. La legitimidad social concedida al sector social hizo que ésta fuera políticamente aceptable para las fracciones alineadas dentro de la coalición gobernante.

⁸ Sobre el análisis de la Reforma Agraria Mexicana, véase entre otros, Esteve, 1980, 1983; Falcón, 1978; González Navarro, 1985; Gordillo, 1979, 1980; Schryen, 1980; Salamini, 1978; Sanderson, 1980 y 1981; Warman, 1980, 1980b.

la emigración, la mayoría sobrevive a duras penas, y sólo una escasa minoría está tomando iniciativas propias de desarrollo rural.

¿Qué significan para las perspectivas del sector social rural la crisis de la tradicional economía mixta de México y el consecuente empuje hacia la privatización? ¿Cómo puede el sector social lograr una mayor autogestión y zafarse del control estatal vertical (como ocurre generalmente en la práctica)?⁹ Este estudio sugiere que un sector social democráticamente organizado ya está encontrando su "nicho", trascendiendo la tradicional afirmación de Estado contra mercado privado es igual a desarrollo. La interrogante que sigue es: ¿bajo qué circunstancias podría este movimiento adquirir relevancia a nivel nacional?

Si la crisis alentó los esfuerzos de desarrollo por la autogestión, legitimizando en teoría su arremetida "desestatizadora", también limitó los recursos para ponerlos en práctica. Los primeros intentos por desarrollar empresas del sector social había dependido en gran medida de una suma positiva en el proceso de asignación de recursos. Durante el *boom* petrolero aquellas empresas con dirección campesina previamente excluidas pudieron empezar a recibir ayuda del gobierno, fundamentalmente porque éstas no competían con los intereses de los poderosos y arraigados. Desde 1982, la asignación de recursos por parte del gobierno se ha hecho cada vez más un proceso de cifra cero. La crisis por lo tanto ha ampliado el espacio político dentro del cual operan las empresas con dirección campesina, a la vez que reduce el cúmulo de recursos económicos por los que éstas negocian y compiten.

¿Cómo puede el sector democrático-social proponerse desafiar al Estado dominante y a los enfoques de mercado que se aplican al desarrollo rural, de manera realista? En algunas instancias, éste no puede competir. La participación popular, por sí sola, no puede generar desarrollo *agrícola*. Para incrementar el rendimiento de las cosechas prioritarias, ya sean para el consumo nacional o para la generación de divisas extranjeras, el producto y la fijación de precios de los factores de producción deben tender a crear iniciativas efectivas para la producción y la inversión.¹⁰

⁹ Algunas empresas que nominalmente pertenecen al sector social, explotaban en realidad a los campesinos, como es el caso, denunciado recientemente, de la producción de algodón en la parte norte y central de la Laguna *Proceso*, 22-11-88).

¹⁰ Sólo si tanto el Estado como el mercado miran hacia una misma dirección podrán las asignaciones de recursos incentivar de forma efectiva las cosechas principales, usando los fac-

DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS DE PODER REGIONAL

Las perspectivas para una interacción entre el Estado, el mercado y el sector democrático-social permanecen como una interrogante, pero podemos empezar a analizar el proceso, definiendo el *subdesarrollo* rural en México. El subdesarrollo rural puede entenderse como el proceso mediante el cual las concentraciones de poder económico, político y social, permiten a una pequeña minoría dominar las decisiones fundamentales que rigen las vidas de la mayoría de los pobladores del campo. Estas estructuras refuerzan el subdesarrollo de la mayoría rural a través del control de la minoría sobre la producción y la asignación de la plusvalía económica. Dicha plusvalía es con frecuencia desviada hacia el consumo comercial del Estado, la producción de cosechas, la creación de fuerzas de trabajo o la acumulación de capital rural. Si aceptamos esta caracterización de subdesarrollo rural, entonces el desarrollo puede definirse como un proceso en el que aumenta la influencia de la mayoría rural en las decisiones sobre la forma en que se produce, se genera y se asigna la plusvalía.

Esta definición sobre el problema del desarrollo rural nos lleva a una imagen muy heterogénea del campo en México. La libertad de reunión efectiva y la capacidad de movilización democrática varía de forma drástica. En algunas regiones, las élites locales todavía conservan un poder e influencia casi absolutos, rehusándose a negociar y respondiendo a las movilizaciones campesinas fundamentalmente con represión (por ejemplo, Chiapas, Veracruz). En otras regiones, los campesinos han logrado crear una fuerza de contrapeso, ganándoles importantes concesiones a las élites (por ejemplo, Chihuahua, Sonora). Gran parte del México rural está entre estas dos posiciones, y el panorama resultante nos obliga a considerar las perspectivas de desarrollo rural desde otro punto de vista, ya que si bien la política de desarrollo es formulada a nivel nacional, la verdadera asignación de recursos la definen las agencias de servicios a nivel *regional*. La historia de los esfuerzos para el desarrollo rural en México es una historia de enfrentamientos con las arraigadas élites regionales, las cuales determinan con frecuencia el campo de acción en el conflicto político-económico.

tores de producción en proporciones que reflejen sus insuficiencias reales. Aun así, el crecimiento agrícola no conduce necesariamente al desarrollo rural, un concepto que contiene inherentemente criterios de distribución, igualdad y poder.

¿Cómo están estructuradas las élites regionales? El sistema conocido como caciquismo concentra el poder económico y político en manos de pequeños grupos regionales. El caciquismo o "jefismo" no es sólo un remanente arcaico de las formas precapitalistas de producción. Si bien ya no tienen influencia en la mayoría de las decisiones sobre política nacional, estas élites han demostrado, sin duda, su capacidad para cambiar con los tiempos. Ahora, las estructuras de poder regionales fusionan sus poderosos intereses arraigados en el aparato administrativo y electoral del Estado, con los intereses locales dominantes del sector privado.¹¹

El caciquismo tiene dos facetas. Por un lado, acomoda su integración regional a la *economía* nacional. Las élites regionales tradicionalmente basaban su poder en la propiedad directa de la tierra, pero a partir de la reforma agraria muchas entraron en el comercio, dominando con frecuencia tanto los factores de producción regional como los mercados de productos. Más aún, muy pocas veces se muestran como estrictos componentes económicos "privados", influyendo muchas veces en la puesta en práctica en la región de los programas de desarrollo nacional (por ejemplo, construcción de carreteras, asignación de créditos, irrigación, construcción, etcétera). Por otra parte, el caciquismo coadyuva frecuentemente a la integración regional en el sistema *político* nacional. En pago por su influencia, las élites regionales aseguran estabilidad política a corto plazo a los administradores del Estado a nivel nacional. Este intercambio político está basado en la capacidad de las élites para aislar a la población de las alternativas políticas nacionales, y para coaccionar y reprimir las iniciativas políticas y económicas regionales autónomas. La principal fuente de poder del cacique es, por tanto, el control de los "términos de comercio" entre la región, el Estado nacional y el mercado.

El caciquismo se ha desgastado en aquellas áreas donde ha aparecido la competencia, ya sea por parte de los movimientos campesinos, por los nuevos personajes económicos, por los rivales dentro del aparato político, o por alguna combinación de éstos. Dicha competencia es más fácil de neutralizar en las áreas rurales apartadas, sin embargo, el caciquismo continúa aún en algunas comunidades urbanas y sindicatos.

¹¹ Para discusiones posteriores sobre el caciquismo, ver Bartra y otros, 1975; Cornelius, 1973 a 1977; Gordillo, 1987; Roniger, 1987; Salmerón Castro, 1984, y Ugalde, 1973.

LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO NEGOCIADOR ESTADO-CAMPESINO
(1934-1972)

Un cuarto de siglo después de que estallaran los primeros sucesos revolucionarios, el presidente populista Cárdenas (1934-1940), impuso un contrato social que institucionalizó el conflicto rural, garantizando una paz rural relativa por más de tres décadas. Los originales ejércitos revolucionarios campesinos fueron derrotados militarmente, pero sus programas de ideas fueron incorporados al contexto constitucional del nuevo régimen. La dirección revolucionaria campesina fue integrada al sistema político, y las alternantes fuentes de poder rural, los grandes terratenientes y el clero, fueron políticamente destruidos (aunque no eliminados).¹²

La política agraria de los años veinte decapitó la dirección de los movimientos de masa campesinos, mediante la coacción o la depresión, pero el gobierno de Cárdenas buscó afanosamente absorber el "liderazgo natural" de los campesinos, introduciendo sus programas a la política del gobierno. La redistribución radical de la tierra fue un incentivo para la movilización de masas, a través de la cual el Estado amplió su base social. El ejido, hasta ese momento visto sólo como un instrumento para la contención de las demandas campesinas, tomó una nueva y contradictoria dinámica que hoy en día continúa. El ejido es simultáneamente un aparato de control del Estado y un órgano de representación campesina. La interacción gobierno-campesinado puede expresarse desde entonces generalmente en términos de la lucha por ver cuál aspecto en la política del ejido dominará.¹³

Para el gobierno de Cárdenas, el ejido estaba llamado a desempeñar un papel tanto económico como político. En el ámbito económico el ejido suministraba alimentos y materias primas al tiempo que ampliaba el mercado interno, basado en la demanda del consumidor, generada por los campesinos con acceso a la tierra. Para garantizar que el ejido funcionara de forma simultánea como órgano de control polí-

¹² Sobre el análisis del periodo de reforma de Cárdenas, véase Córdova, 1974; Cornelius, 1973b, y North y Raby, 1977.

¹³ El ejido es una institución comunitaria cuya dirección se elige ostensiblemente a través de elecciones democráticas. Sin embargo, la intervención paternalista del gobierno en este proceso está institucionalizada, y el Estado actúa como tutor de los ejidatarios. La dirección del ejido, con el apoyo del gobierno, frecuentemente genera nuevos caciques. Hasta que se modificó la legislación en 1938, los candidatos a la dirección que perdían formaban los consejos de vigilancia en un esfuerzo por mantener la responsabilidad de la dirección electa y la representación de posiciones minoritarias.

tico, se creó una organización de masas piramidal, acorde con los lineamientos corporativistas para representar al "sector campesino dentro del partido gobernante: la Confederación Nacional Campesina (CNC) se fundó en 1938, y a todos los beneficiados con la reforma agraria se les consideró miembros, automáticamente.

Aunque la CNC fue fundada por decreto presidencial, su formación no fue un proceso exclusivamente vertical, "de arriba hacia abajo". La creación de la CNC estuvo precedida por varios años de apoyo gubernamental a las movilizaciones para reformas sobre la tenencia de la tierra, muchas de las cuales se *unificaron* en ligas agrarias de nivel regional y estatal. El Estado sí se alió al campesinado, armando a las milicias rurales para repeler los ataques de los terratenientes. Si por un lado Cárdenas estableció los términos de la alianza, la formación de la CNC representó la convergencia de las movilizaciones desde la base y los esfuerzos del Estado por consolidar su hegemonía en el campo.

La creciente influencia del Estado en el campo no se limitó a la formación de una organización cooperativista de masas. A las agencias agrarias oficiales también se les invistió de amplios poderes para "guiar" el comportamiento de los ejidos y, sobre todo, para regular el acceso a la tierra. La formación de ejidos colectivos en zonas de alto desarrollo de irrigación, estuvo ligada a la creación de agencias gubernamentales para el desarrollo rural, la más importante, el banco agrícola del Estado. En teoría, estas agencias estaban destinadas a apoyar a los ejidos en su lucha por la autonomía, pero las dinámicas burocráticas y las prioridades políticas las llevaron a afianzar el control del gobierno sobre la producción y el mercado agrícola.¹⁴ Las instituciones rurales del gobierno crearon una división del trabajo; la CNC canalizaba las demandas campesinas y las agencias para el desarrollo rural manejaban las regulaciones y respuestas a éstas.

LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA OBLIGA A REINCORPORAR AL ORDEN
DEL DÍA, EL TEMA DEL DESARROLLO RURAL (1972-1976)

El Estado cardenista construyó un gran capital político en el campo; durante los años treinta, un tercio aproximadamente de la población

¹⁴ Ver, por ejemplo, Aguilar y Araujo, 1984; Hewit de Alcántara, 1976; Hellman, 1983, y Rello, 1987.

rural recibió tierra. La combinación de instituciones-edificaciones, medidas de redistribución, y controles legales conocidas como "la alianza campesinado-Estado", funcionó de manera relativa durante tres décadas hasta que una crisis en la economía campesina, unida a un aumento en la decisión de realizar acciones conjuntas con el fin de socavar las bases cooperativistas, originaron un nuevo ciclo de movilizaciones más autónomas en los años setenta y ochenta.¹⁵

El movimiento de protestas campesinas de 1972-1976 fue el resultado de la convergencia de factores políticos y económicos. Primero, el modelo de crecimiento agrícola, surgido desde los años cuarenta, con su subordinación a la industria y su énfasis en la producción para la exportación, empezó a debilitarse a mediados de los sesenta. Tanto los precios de producción como la inversión agrícola fracasaron, debilitando la producción de alimentos y descapitalizando la economía campesina.¹⁶ Segundo, las décadas de una política conservadora de redistribución de la tierra empezaron a debilitar la legitimidad política de las masas en el campo. La política agraria del presidente Díaz Ordaz (1964-1970) combinó niveles de distribución de tierra no cultivable sin precedentes, con un discurso político que anunció el fin de la reforma agraria. Esto socavó uno de los pilares principales de estabilidad social entre los no poseedores de tierra: la esperanza de que, algún día, llegaran a tener un pedazo de tierra propio y, por consiguiente, acceso a un ingreso estable. Con los "conductos reglamentarios" cerrados, la CNC se debilitó en gran medida.¹⁷

Mientras tanto, las presiones se incrementaron en tres frentes distintos. En primer lugar, los incrementos de población en los ejidos provocaron que los hijos de los beneficiados con la reforma agraria

¹⁵ Si bien las olas de movilización campesina marcan las décadas intermedias, estuvieron limitadas sólo a determinadas regiones y no afectaron la orden del día para el desarrollo nacional. Los movimientos más importantes los dirigieron la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), fundada en 1948; Rubén Jaramillo, asesinado en 1962, y la central campesina independiente (CCI) se dividieron en alas antiimperialistas. Para este periodo, ver Hardy, 1984.

¹⁶ Para una variedad de perspectivas sobre los orígenes de la crisis alimentaria en México de los setenta y los ochenta, ver, por ejemplo, Appendini and Salles, 1980; Barkin y Suárez, 1985; Boltvinik y Pessah, 1981; Cartas, 1988; CEPAL, 1981, 1982; De Walt, 1985; Esteva, 1980-1983; Fox, 1986; González Rodríguez, 1977; Grindle, 1981; Hall y Price, 1982; Hewitt, 1976; Luiselli y Mariscal, 1981; Montañez y Aburto, 1979; Reynolds, 1978; Sanderson, 1986; Spalding, 1984; Wionczek, 1982, y Yates 1981.

¹⁷ Algunos líderes regionales y locales de la CNC continuaron sin embargo los intentos por representar su membresía en algún grado, mientras otros mantenían su apoyo a través de servicios paternalistas y rompimiento con las agencias del gobierno. Ver Hardy, 1984.

carecieran de tierras suficientes para subsistir. En segundo lugar, los trabajadores asalariados de los negocios agrícolas destinados a la exportación empezaron a demandar la puesta en práctica de leyes de reforma agraria. En tercer lugar, las comunidades indígenas protestaban cada vez más por los violentos desalojos a que eran sometidos por parte de los grandes hacendados, quienes convertían las tierras fértiles de cultivo en grandes terrenos de pastoreo, principalmente para satisfacer la creciente demanda de carne de res en la Ciudad de México.¹⁸

Cuando en 1972 estallaron las invasiones en las tierras de un grupo de estados del interior, el gobierno de Echeverría (1970-1976) las toleró parcialmente. La represión del movimiento estudiantil en 1968 había creado una nueva retórica de reforma populista y una "apertura" política que incrementó la esperanza de que el gobierno hiciera al menos algunas concesiones con el fin de reconquistar su legitimidad popular. Las masas siempre vieron a estas invasiones de tierras como una extensión de un largo proceso, sostenido por décadas, de trabajo dentro del sistema, pero un sistema que necesitaba ser acelerado por una acción militante mayor. De 1972 a 1976 la mayoría de los 32 estados de México sintieron las presiones provocadas por las ansias de posesión de la tierra. A finales de los años sesenta el estado de Guerrero fue el centro de dos levantamientos armados regionales, de carácter campesino.¹⁹ Las presiones desde la base obligaron a la radicalización de las organizaciones campesinas oficiales en algunas regiones, y en otras los nuevos movimientos independientes ignoraron a las federaciones gubernamentales.²⁰

El eje central del movimiento era la demanda de la tierra, pero como la cuestión primaria era la puesta en práctica de una ley agraria, el movimiento se configuró de acuerdo a la especificidad local de la mayoría de los conflictos. También se hicieron demandas no refe-

¹⁸ El desalojo de campesinos indígenas, por parte de los rancheros fue particularmente violento en Chiapas (Fernández y Tarría García, 1983) y en las Huastecas (Ávila y Cervantes, 1986). En el sector ganadero, ver Reig, 1984, y Sanderson, 1986.

¹⁹ Ver, por ejemplo, Mayo, 1980.

²⁰ Las presiones en la competencia desde arriba y desde la base provocaron tensiones entre las autoridades regionales y nacionales de la CNC. Ver Hardy, 1984, para el análisis más cuidadoso de las políticas internas de la CNC durante los setenta. Para estudios posteriores de los conflictos agrarios del periodo de Echeverría, ver entre otros, Astorga Lira y Hardy, 1978; Ávila, 1986; Bartra, 1980, 1985; Canabal, 1982, 1984; Castell Cancino y Rello, 1981; Durán y otros, 1986; Gomezjara, 1979; Gordillo, 1980, 1988; Levy, 1977; Menéndez, 1981; Montes de Oca, 1977; Rello, 1976 y Warman, 1980a.

ridas a la posesión de la tierra, que abarcaban desde los precios de producción hasta la democratización municipal, dando inicio a corrientes que cobrarían auge en un futuro. A causa de esta descentralización, la movilización no era tan "nacional" como de convergencia simultánea de muchos movimientos regionales. El resultado fue una presencia política nacional, sin una sola manifestación única, con una multiplicidad de corrientes políticas urbanas compitiendo entre sí por la dirección del movimiento campesino.

El gobierno de Echeverría fue sensible a la crítica del sector izquierdista a la antigua política agraria y respondió con una amplia gama de programas de desarrollo. Pero la agricultura comercial había madurado bajo la protección estatal, y ya en los años setenta los grandes productores estaban bien organizados. El intenso conflicto sociorrural provocó mayores presiones para que el gobierno hiciera concesiones. Según los reformistas dentro del gobierno, era más fácil aislar y confrontar a caciques e intermediarios que afectar los intereses de negocios en el agro, planteando así la definición oficial de que la ineficiencia y la desigualdad rural eran el principal obstáculo que limitaba el progreso en el campo. Puesto que los subsidios y la regulación del mercado dejaban jugosos beneficios a un costo político mucho menor que el de la redistribución de la tierra, la intervención del mercado y la creación de empleos por medio de trabajos públicos pasaron a ser prioridades en el desarrollo rural.²¹

Aún así, algunos movimientos rurales regionales lograron reintroducir el problema de la redistribución de la tierra en la orden del día nacional, y Echeverría se vio obligado, con el tiempo, a ceder grandes extensiones de tierras ilegalmente concentradas a miles de campesinos

²¹ El gobierno buscó métodos más eficaces para reformar la distribución de la renta rural: la agencia oficial de comercio de alimentos, CONASUPO, y una amplia gama de programas novedosos para el desarrollo rural, principalmente los asociados al mercado. Ver Esteva, 1979, y Grindle, 1977. Algunos políticos de CONASUPO intentaron organizar a las comunidades campesinas para contraponerlas al poder del caciquismo, con resultados mixtos. Otra agencia del gobierno, RIDER, llevó a cabo proyectos a corto plazo para la creación de empleos bajo el lema de "desarrollo de la integración rural". Para una evaluación oficial del Banco Mundial, ver Cernea, 183. La Universidad Nacional Agrícola también organizó el Plan Puebla, un programa de producción para los pequeños propietarios que con el tiempo apoyó a varios grupos de productores regionales. Para una variedad de opiniones sobre el Plan Puebla, ver Díaz Cisneros y Feltehausen, 1985, y Redclift, 1983. Estos esfuerzos por reformar no produjeron cambios rápidos o sistemáticos en la balanza de poder rural, pero allí donde los reformistas controlaban la asignación de recursos, algunos de ellos pudieron encaminarlos hacia los movimientos rurales incipientes.

desposeídos en el mismo centro de algunos de los distritos más fértiles de México.²² Las muchas formas de las que se valió el Estado para intervenir de manera creciente en el campo, tienen una característica en común: las agencias gubernamentales, con sus propios intereses institucionales, que fueron desplazando a la CNC, la tradicional "regente de las demandas", de la toma de decisiones como mediadora en la relación Estado-campesinado.

Además de algunas redistribuciones de la renta y la propiedad rural, el gobierno de Echeverría también llevó a cabo cambios legales e institucionales que modificaron el panorama en el campo durante los años ochenta. La reforma de 1971 al Código Agrario presentaba al ejido con una versión nueva, "integral: la de una institución tanto política como económica, haciendo del desarrollo rural con administración política, una prioridad oficial, por primera vez desde los tiempos de Cárdenas. Hacia el final del gobierno de Echeverría, la política agraria centró sus esfuerzos en colectivizar miles de ejidos parcelados, para consolidar económica y políticamente el sector ejidal bajo la tutela del gobierno. Como el intento se promovió sólo por decreto, fracasó casi totalmente.²³

En el contexto de este énfasis en la "organización", como la fase de "posredistribución" de la reforma, en 1975 se enmendó la Ley de Crédito Agrícola para alentar la formación de asociaciones regionales de pequeños productores por primera vez desde los años treinta. La Secretaría de la Reforma Agraria (acabada de promover al nivel de gabinete) comenzó entonces a promover lo que se llamó "organizaciones de segundo y tercer nivel". Se definió como segundo nivel al agrupamiento de dos o más grupos de productores locales, tales como los ejidos, comunidades indígenas agrarias o sociedades y cooperativas de producción privada; las uniones de ejidos eran las más comunes. Las organizaciones de tercer nivel agrupaban dos o más grupos de segundo nivel, y se las conocía como "asociaciones rurales de intereses

²² Las cifras oficiales no reflejan la importante distinción que tiene tan inusual distribución de 13 millones de hectáreas de una calidad relativamente alta, hecha por el gobierno de Echeverría. La redistribución incluyó 42 000 hectáreas en los valles Yaqui y Mayo en Sonora; más de 20 000 hectáreas en Sinaloa, más de 100 000 hectáreas en Chihuahua y Durango; más de 20 000 hectáreas en Zacatecas, así como extensiones más pequeñas significativas en Tlaxcala, Puebla, y Guerrero. Para el caso de Sinaloa, ver Hardy, 1984. Para datos sobre la experiencia en Sonora, ver Bejamín y Buell, 1985; Gordillo, 1988; Rello, 1986, y Sanderson, 1981.

²³ Para la colectivización de los ejidos, ver César Dachary, 1987; Székely, 1977, y Warman, 1980.

colectivos". Estas nuevas formas legales intentaron reunir a grupos de productores comunitarios alrededor de un interés económico común (por ejemplo, suministro de créditos, procesamientos, venta de productos).

Casi tres mil ejidos fueron organizados en 181 uniones de ejidos durante el gobierno de Echeverría, 11% del total existente.²⁴ El registro oficial constituía un prerrequisito para gran parte de la actividad económica de colaboración, pero la mayoría de los grupos registrados eran impuestos desde arriba por una u otra agencia gubernamental. La amplitud y lo complejo de las técnicas de estos proyectos facilitaba el control burocrático, creando grandes oportunidades para el engrandecimiento económico y político de los funcionarios del desarrollo rural. A consecuencia de este enfoque verticalista, muchas de las uniones de ejidos que se formaron durante este periodo, pronto pasaron a existir sólo en el papel. Sin embargo, a la larga el resultado sería bien diferente. El marco legal creado para estas instancias de dirección campesinas, así como la legitimidad "desarrollista" que se le concedió a estas formas "superiores" de organización, dejaban un recurso institucional del que se aprovecharían los movimientos de productores agrícolas en un futuro.

DESARROLLO RURAL: DEL "BOOM" PETROLERO A LA CRISIS (1976-1986)

La redistribución, desesperada y de última hora del gobierno de Echeverría, de las posesiones ilegalmente concentradas en el estado de Sonora, provocó un contraataque del poderoso sector privado, lo que contribuyó a una crisis política y económica aguda al acercarse el cambio presidencial. Como la mayoría de las medidas populistas de Echeverría, esta amplia concesión significaba muy poco para un movimiento campesino regional militante y llegaba demasiado tarde como para generar una alternativa política que permitiera una nueva redistribución de la tierra posterior al cambio presidencial.

El presidente entrante, López Portillo (1976-1982), heredó la peor crisis económica de México desde 1940. Se pusieron en práctica algunas reformas sociales, siguiendo el ejemplo de los intentos populistas de Echeverría de buscar soluciones económicas a los problemas

²⁴ Los datos oficiales se pueden consultar en: "Directorio de Uniones de Ejidos", Secretaría de Reforma Agraria, 1985.

políticos.²⁵ El cambio presidencial de 1976 tuvo un impacto decisivo en el movimiento campesino. La política de Echeverría de responder ocasionalmente a las demandas campesinas con concesiones amplias propició una creciente acción rural colectiva que decidió avanzar a pesar de los riesgos inherentes. La política agraria de López Portillo comenzó con generosas compensaciones a aquellos terratenientes que habían sido expropiados, y la retórica oficial señalaba la importancia de mejorar las rentas rurales en vez de redistribuir la propiedad. Este cambio significaba que no toleraría más a aquellas movilizaciones campesinas previamente consideradas legítimas, y muchos de los recién creados grupos independientes vieron que a sus tácticas se les oponía no la negociación sino la represión porque el gobierno de Echeverría había dado amplias concesiones a los movimientos más poderosos.²⁶

Cuando una nueva redistribución de la tierra se hizo políticamente impracticable, muchos observadores llegaron a la conclusión de que una reforma rural en general sería imposible, y predijeron que la propuesta de López Portillo de la Ley para el Fomento Agrícola significaría una verdadera reversión al proceso de reforma agraria. En 1980, sin embargo, empezó a cambiar el énfasis del gobierno. La entrada de recursos con el *boom* petrolero dio al gobierno suficiente libertad de movimiento para centrar su atención no ya en la renovación de las condiciones de la acumulación de capital sino en una mayor renovación de la legitimidad de masas del sistema político.

Después de tres años de rechazo relativo y en especial de la desastrosa caída en la cosecha de 1979, López Portillo decidió dirigir recursos incrementados a la agricultura. Una vez empezado el programa COPLAMAR de clínicas rurales y agencias de distribución de alimentos subsidiados, el presidente adoptó la estrategia del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) para recobrar la autosuficiencia de México en granos básicos.²⁷ La política agrícola cambiaría su énfasis: ya

²⁵ En parte por el intento de Echeverría de abrir significativamente el sistema político, López Portillo fue elegido sin oposición, y grandes salidas de capital debilitaron al gobierno frente al sector privado. El ala derecha de la coalición gobernante dominaba la política económica y social, aunque los reformistas mantuvieron suficiente influencia para buscar una apertura parcial del sistema electoral. Sobre la reforma política de 1977-1979 ver, entre otros, Gómez Tagle, 1982-1984; Middlebrook, 1981, 1986, y Rodríguez Araujo, 1981. Para el cambio en el terreno ideológico después del 76, ver Gordillo y Rello, 1979.

²⁶ Ver nota número veintidós. Para documentación sobre la caída del poder de movilización después del 76, ver Alcántara, 1981; Aguado López y otros, 1983, y Camahji, 1979.

²⁷ Para el desarrollo de este análisis de los orígenes del SAM, ver Fox, 1986, capítulo tres.

no en los productos para exportación y cosechas de lujo, sino en los granos básicos de dependencia pluvial que producían los campesinos en su mayoría.²⁸

Para los tres o cinco millones de campesinos existentes (depende de la definición que se utilice de campesinos sin tierra), el cambio en 1980 significó sí mucho, un pequeño aumento en el acceso a los empleos y a la tierra cultivable; este apoyo nuevo también los benefició, en el ámbito de un énfasis "modernizador", en la producción.²⁹

La estrategia de producción del SAM surgió de un estancamiento político nacional en las relaciones de producción, descansando fundamentalmente en los precios de cosechas incrementados y en los subsidios. Los grandes negocios privados en el agro, los intereses comerciales y de latifundios, con sus aliados conservadores en las agencias agrícolas nacionales y en los gobiernos estatales, eran suficientemente poderosos para bloquear una extensión significativa de la reforma agraria, pero eran también muy débiles para revertirla (por ejemplo, para crear un mercado "libre" para la tierra en el sector de la reforma y eliminar definitivamente la amenaza de la expropiación).³⁰

Al mismo tiempo, los movimientos rurales y urbanos dentro y fuera del Estado, eran demasiado débiles para obligar a una revitalización profunda de la reforma agraria. La amenaza potencial de su respuesta a una reversión de la reforma les dio cierto poder de decisión que compensaba el derecho al voto. Por su parte, el SAM se originó fundamentalmente por una "reforma desde arriba", como consecuencia de las maniobras creativas de políticos reformistas "pospopulistas" cercanos al presidente. Los estudios sobre movilizaciones rurales ocurridas durante 1976-1982 dan poca evidencia de grandes presiones campesinas antes de la decisión del SAM (Aguado López y otros, 1983; Fox, 1986; Rubio, 1987). Más aún, las movilizaciones campesinas se incremen-

²⁸ La estrategia del SAM generó un amplio debate acerca de los límites y posibilidades de los cambios agrícolas. Ver, por ejemplo, la edición especial de *Nueva antropología*, 17-v-81. Para análisis de la puesta en práctica de la estrategia del SAM, ver Austin y Esteve, 1987 y Fox, 1986.

²⁹ La redistribución de tierras sí se incrementó durante 1980-1982 pero aun así permaneció con bajos niveles comparado con el periodo 1972-1976, según datos oficiales de la Secretaría de la Reforma Agraria.

³⁰ La Ley para el Fomento Agrícola (LFA), dictada en el transcurso de 1981, legitimaba por primera vez la práctica ya extendida de rentar las tierras de los ejidos. El fracaso de esta ley fue una victoria política para los que abogaban por un enfoque verticalista, aunque los reformistas pro SAM lograron bloquear la mayor parte de su puesta en práctica (Fox, 1986).

taron en gran medida sólo en 1981 y 1982 (Aguado López y otros, 1983; Rubio, 1987) sugiriendo así la hipótesis de que la estrategia del SAM estimuló los movimientos sociorrurales.

A causa de los orígenes verticalistas del SAM, la mayoría de las acciones para poner en práctica sus reformas, aparentemente radicales, a la política de alimentos, se encaminaron a destinar recursos incrementados a la producción de granos básicos sin cambiar la balanza de poder en el campo. Los esfuerzos para el desarrollo rural del SAM y la COPLAMAR crearon, sin embargo, una pequeña pero significativa "apertura desde arriba" para los movimientos campesinos autónomos. Dicha apertura fue pequeña porque estaba limitada a aquellas pocas regiones políticas y áreas geográficas donde los reformistas intervenían de manera efectiva en la formulación y puesta en práctica de la política de desarrollo (por ejemplo, distribución de alimentos en las zonas rurales). La apertura fue significativa porque ofreció recursos políticos y económicos de utilidad para las organizaciones campesinas autónomas y representativas. Como se verá más adelante, esta apertura ayudó a consolidar las organizaciones campesinas regionales, desplazando en parte a las élites rurales en la balanza de poder.

El movimiento campesino respondió al cambio de fuerzas dentro del Estado durante los años setenta y ochenta con una amplia gama de tácticas. A finales de los setenta, sin embargo, dos extremos de este espectro fueron eliminados. En un extremo, a aquellas áreas que habían tenido levantamientos armados (por ejemplo, Guerrero) o a las que, según las autoridades, ofrecían ese peligro en forma potencial (por ejemplo, parte de Puebla, centro de Veracruz), se les sometió a estrategias político-militares de desmovilización con énfasis en la coacción. En el otro extremo, el cambio en la política agraria de 1976 revirtió a las organizaciones campesinas oficiales que hasta ese momento se habían inclinado hacia la izquierda para evitar ser rebasadas por alternativas independientes. Obligatoriamente, dejaron a un lado el *neolatifundismo* y centraron su atención en la nueva prioridad de "organización" en el marco de la "alianza para la producción" del presidente con el sector privado.

La gran variedad de grupos campesinos que se encontraban entre estos dos extremos, y que representaban en diversos niveles las preocupaciones y anhelos de sus miembros, se agruparon en cinco categorías. En la primera, las organizaciones oficiales de productores de bienes "recobraron" la membresía que tanto tambaleó a principios de los

setenta. En la segunda, los movimientos de reformas locales en el campo continuaban la movilización y la resistencia a la represión. En la tercera, los sindicatos intentaban organizar a los campesinos desposeídos. En la cuarta, las políticas reformistas sobre alimentos abrían oportunidades para la formación de organizaciones de consumidores autónomas y regionales para participar en la distribución de los granos subsidiados. En la quinta, las nuevas formas de iniciativas económicas autónomas organizaban, en forma creciente, a los productores en empresas regionales. Estas diferentes formas de expresión de los intereses campesinos se complementaron con una importante y cada vez mayor movilización de otros sectores: los indígenas luchaban por autonomía y respeto, a la vez que los ciudadanos rurales demandaban una democratización municipal y la defensa del control local de los recursos naturales.

ORGANIZACIONES OFICIALES DE PRODUCTORES

Para muchos campesinos, la experiencia de los años setenta significó participar en una organización oficial hasta que surgiera una ruta más efectiva de distribución de la tierra a base de grupos militantes e independientes, y de ahí llegar a una organización oficial donde el cambio fuera viable desde el punto de vista político. Muchos de los grupos radicales que surgieron a principios y mediados de los setenta perdieron con el tiempo la mayoría de sus bases. Esto sucedió de diversas formas.³¹ En un escenario común, un movimiento independiente ayudaba a los campesinos a movilizarse para lograr sus demandas, pero luego era abandonado por la mayoría de sus antiguos constituyentes después de que por lo menos algunos participantes ganaban determinadas concesiones. Las organizaciones independientes durante este periodo raramente ofrecían una alternativa viable para trabajar la

³¹ En un escenario la represión incrementada se anuló por largo tiempo a una organización independiente, mientras las organizaciones progubernamentales estaban a la expectativa para sacar provecho. Esto parece describir el caso de la Unión Campesina Independiente (UCI) en el norte de Puebla y el Centro de Veracruz. Para datos de activistas, ver Ramos y otros, 1984. El grupo que creció a raíz de las derrotas de la UCI fue Antorcha Campesina, una organización campesina "paramilitar" altamente centralizada, particularmente violenta en sus campañas contra los competidores izquierdistas independientes y los caciques locales. El grupo ha mantenido relaciones ambiguas con aliados del gobierno, lo que provocó acusaciones de que éste actuaba como el ala paramilitar de la CNC. Para entrevistas inusuales con el misterioso líder de Antorcha, ver *La Jornada* (12, 13, 14-v-86).

tierra, mientras que las organizaciones oficiales en asociación directa con las agencias del gobierno, podían facilitar el acceso a los factores de producción.³²

Quizás la forma en que el Estado más se reafirmó como una alternativa de organización fue mediante la consolidación de las asociaciones oficiales de productores. "El primer enfoque de producción" de López Portillo promovió la organización de agricultores en los parámetros de producción, como una manera de integrar a los pequeños productores a los sistemas agroindustriales del Estado o regulados por éste. El gobierno de Echeverría estimuló muchas empresas estatales regionales y nacionales que procesaban o comercializaban cosechas industriales, y éstas más tarde se consolidaron como los componentes políticos y económicos fundamentales durante el periodo de López Portillo. Junto con la CNC, eran las fuerzas principales en la promoción de las asociaciones oficiales de productores de mercancías que agrupaban a los agricultores del café, el azúcar, el trigo, el tabaco, las fibras (algodón, henequén, ixtle), el caucho y el aceite de oliva.³³

Las organizaciones oficiales de productores no siempre eran nuevas, y sus demandas de mejores términos crediticios, precios, y acuerdos de mercado eran con frecuencia antiquísimas, pero el énfasis que López Portillo le dio a la organización para la producción creó mayores espacios potenciales para la negociación. Sin embargo, a menos que existiera una membresía movilizada, las organizaciones de productores carecían de un poder de negociación fuerte frente a las empresas estatales. La membresía no siempre era voluntaria, ya que algunas veces las empresas estatales exigían credenciales de la CNC para poder comprar las cosechas de los agricultores.

³² Tomemos, por ejemplo, el caso del Frente Popular de Zacatecas (FPZ). A mediados de los setenta, 30 000 campesinos se fueron a una marcha por las estrechas calles de la capital colonial, pero para finales de los setenta, su base rural se redujo a algunos ejidos consolidados. Los líderes del FPZ han reconocido que sus tácticas radicales de producción colectiva eran inapropiadas para la mayoría de los ejidatarios que acaban de recibir sus títulos de propiedad (*La Jornada*, 2-IV-85).

³³ Después de 1973, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) incrementó en gran medida su penetración en los mercados rurales. A través de una provisión de facto de crédito fijo (en forma de "avances"), INMECAFE aumentó su participación en el mercado nacional de un 6.4% en 1970-1971 a un 47% en 1981-1982. El número de miembros de su producción asociada y sus uniones de mercado aumentó de 53 a 272 en 1982. Según encuentros realizados por el Centro de Desarrollo Económico, INMECAFE logró organizar al 67% de los productores entrevistados entre 1987 y 1989. Ver Nolasco, 1985.

La influencia económica de las asociaciones oficiales de productores creó nuevas fuentes de poder y vitalidad dentro de la CNC, compensando en parte la pérdida de auge en su desempeño tradicional. Sin embargo, las organizaciones de distribución de mercancías carecían con frecuencia de mecanismos para mantener la dirección en la base, lo que las hacía recurrir a los llamados "campesinos-empresarios", que generalmente aspiraban tanto a la acumulación de capital individual como a la de las organizaciones, a expensas de los intereses de sus miembros. En la medida en que surgieron más asociaciones autónomas de productores, la competencia entre las fracciones oficiales de dirección por membresías reales creó más incentivos para la prestación de servicios a la base. Cuando la dirección se comportó de forma insensible, algunas fracciones de las organizaciones autónomas de productores comenzaron a valorar la posibilidad de una opción de "salida", pues por otro lado, carecían de alternativas viables.³⁴

RESISTENCIA AGRARIA PERSISTENTE

Algunas de las organizaciones independientes que surgieron a principios de los años setenta lograron sobrevivir al cambio en la política agraria oficial que ocurrió en 1976. A finales de los setenta, la lucha de éstas fue esencialmente defensiva, concentrando sus energías en la resistencia a la represión caciquista y del gobierno, a la vez que continuaban demandando reformas radicales. Esta tendencia incluía a la mayoría de los grupos que en 1979 se unieron para formar la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). La CNPA se reunió por primera vez en ocasión del aniversario de la muerte de Zapata, como resultado de los planes del gobierno para trasladar sus restos al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Esta afrenta a la militancia agraria tradicional provocó que grupos disímiles se unieran, incluyendo a organizaciones regionales independientes, grupos oficiales de tendencia izquierdista, y grupos vinculados a partidos de izquierda. Para 1980 esta amplitud se había reducido, y los grupos regionales independientes más militantes se convirtieron en los fundadores de una nueva forma de organización, la *coordinadora*. Contrastando con las

³⁴ En 1984, por ejemplo, varios miles de miembros de la asociación oficial de productores de café abandonaron la misma para unirse a una federación independiente, la UNCAFACSA, que es actualmente parte de la CNC. Ver *Proceso*, 27-vii-84.

tradiciones oficiales e independientes de organización, en la confederación centralizada, o *central*, la CNPA era una organización nacional flexible que permitía a cada grupo mantener su autonomía, y al mismo tiempo los unía bajo el principio de demandas básicas y movilización para la confrontación y contra la represión.

La CNPA representaba en su mayoría a indígenas y a otros productores de subsistencia. Las comunidades indígenas son muy oprimidas en México, política y económicamente, pero la supervivencia de los lazos tradicionales de la comunidad ha reforzado en gran medida su unidad interna y su solidaridad, aspectos fundamentales para mantener la movilización frente a las condiciones adversas. Para mediados de los ochentas, la CNPA coordinaba las acciones de alrededor de veinte organizaciones en quince estados.³⁵ Después de acciones conjuntas con grupos de profesores y habitantes de vecindades militantes a principios de los ochenta, la CNPA participó en su primera gran acción junto a otros grupos campesinos de izquierda en 1984, como coordinadora en la marcha campesina más importante en varias décadas, realizada en la capital del país.³⁶ Los movimientos democráticos de profesores y las comunidades cristianas dieron un gran apoyo a varios afiliados a la CNPA. En 1985, la CNPA comenzó por primera vez a diseñar proyectos económicos a gran escala, como los proyectos para la comercialización de alimentos en forma directa productor-consumidor con las organizaciones comunitarias urbanas radicales.³⁷ En 1986, sin embargo, las tensiones internas que se venían dando acrecentaron el poder que debían desempeñar los partidos de izquierda, lo que provocó una aguda división en la CNPA entre fuerzas propartidistas y antipartidistas.

³⁵ Para un análisis de la CNPA y descripciones de sus grupos miembros, ver CNPA, 1985. Ver también Bartra, 1985; Canabal, 1986; Montes, 1982, y Rubio, 1987.

³⁶ Esta marcha se convirtió en la primera de una serie de esfuerzos de coalición para movilizar a las masas por el asesinato de Zapata. Las otras organizaciones que participaron en la marcha fueron la UGOCM (fracción roja), una corriente del Partido Popular Socialista (PPS), y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Ambas tenían sus bases de magnitud relativa en varias regiones. Para discusiones sobre las marchas del 10 de abril de los años 1984, 1985 y 1986, ver, por ejemplo, "Las movilizaciones del 10 de abril de 1984". *Lecturas Campesinas*, Universidad Autónoma de Chapingo, 1984 y "La marcha nacional campesina del 10 de abril: símbolos y realidades". *Boletín Agro* núm. 4, IIS, UNAM, 1985.

³⁷ Ver los procedimientos de una conferencia del movimiento rural sobre el autocontrol del mercado, que incluye a grupos relacionados con la CNPA, entre otros (Equipo Pueblo/Instituto Maya, 1987).

SINDICALIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

Los altos niveles de subdesarrollo estructural en la agricultura mexicana provocan que los campesinos estén en una posición de negociación muy débil. Con los índices de migración temporal, la organización se hace bastante difícil, y a la vez los obreros asalariados con frecuencia ven un posible acceso a la tierra o un trabajo en los Estados Unidos, como las variantes más viables para un empleo regular. Si el gobierno, de forma nominal, ha permitido que los obreros asalariados de la agricultura se sindicalicen, en la práctica sólo a un puñado de sindicatos oficiales se les ha concedido contratos de negociación. Las organizaciones oficiales laborales y de campesinos bajo la presión de las independientes, han competido con retórica por el derecho de organizar a los agricultores, pero ninguna de las dos partes lo han intentado seriamente.

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), es quien ha realizado los intentos más importantes por la sindicalización en la agricultura. La CIOAC estuvo en sus orígenes asociada al Partido Comunista Mexicano (PCM), pero se hizo más autónoma en la medida en que el PCM se fue uniendo a casi todas las otras fuerzas de izquierda y tomó un carácter pluralista.³⁸

MOVILIZACIÓN AUTÓNOMA DE LOS CONSUMIDORES

En 1979, el gobierno comenzó un programa de distribución de alimentos en gran escala, administrado de forma conjunta por CONASUPO y COPLAMAR. Para finales del periodo de López Portillo, este programa se había extendido a cerca de 10 000 tiendas en el interior del país. Para asegurar que el aparato burocrático de CONASUPO entregara los suministros a las muchísimas y remotas sucursales, la administración de las tiendas, incluyendo la vigilancia de la venta al por mayor, fun-

³⁸ Para una colección completa sobre la sindicalización rural, ver de Grammont, 1986. El análisis clásico de la proletarianización rural se ve en Paré, 1977, mientras Astorga Lira, 1985, y Grindle, 1988, analizaron las dinámicas de los mercados de trabajo rurales. Ver también López Monjardín, 1987, para el análisis de los movimientos de obreros en el campo. En Chiapas, las demandas relativamente moderadas de los sindicatos de la CIOAC se han visto frustradas durante mucho tiempo por la represión. Para estudios de los movimientos rurales en Chiapas, ver Moncada, 1983; Odile y Singer, 1984, y el número entero de *Textual*, septiembre de 1983, Universidad Autónoma de Chapingo. Para un estudio particular del capítulo sobre la CIOAC en los estados (en el estado de Puebla) ver Montes, n.d.c. 1985.

damental para el proceso de distribución al por menor, se entregó a comités de organización.³⁹

Políticos reformistas situados estratégicamente proporcionaban legitimidad política y apoyo logístico masivo (por ejemplo, cerca de 3 000 camiones), para la movilización democrática en la comunidad frente a la contraofensiva de los grupos de intereses del sector público y privado que se oponían al programa. Puesto que cada almacén debía ser administrado por el consejo alimenticio de la comunidad elegido en los pueblos circundantes, el movimiento en un principio se desarrolló a nivel regional, pero en 1983 la primera red de consejos a nivel nacional se reunió en Oaxaca. Para 1985, los consejos de Oaxaca llevaron a la formación de una incipiente red nacional, independiente de las organizaciones campesinas existentes y de los partidos políticos pero aliada a los grupos autónomos de productores.⁴⁰ Este movimiento compitió con CONASUPO en lo referente a un mejor desempeño y un control local mayor de las operaciones y obtuvo un éxito relativo, pero con el tiempo se extendió demasiado. Los hasta entonces tolerantes políticos de CONASUPO comenzaron a emplear la táctica de "divide y vencerás", infigiéndole grandes reveses (especialmente en Oaxaca).

La apertura también llegó hasta la organización de los consumidores. Los consejos alimenticios de las comunidades más consolidadas encaminaron sus esfuerzos al uso de los almacenes, camiones y personal para la compra de factores de producción y la venta de cosechas a nivel regional, aumentando en gran medida el poder negociador del productor tanto en el mercado como frente a las agencias del gobierno.⁴¹ El programa CONASUPO-COPLAMAR para las tiendas de pueblos

³⁹ Las operaciones de los programas las manejaron las subsidiarias de distribuciones de CONASUPO y DICONSA. Como la describiera el director general de DICONSA, Raúl Salinas de Gortari, la estrategia de implementación: "¿Por qué no decirlo?, existen algunos administradores que no están completamente comprometidos con los campesinos y con los beneficios de este programa... Ustedes (los campesinos) presionan desde la base, y aquí arriba se les bloquea". (*El Día*, 31-viii-85).

⁴⁰ La asamblea de Oaxaca reunió a más de 300 delegados, en representación de 106 consejos y 4 162 comunidades de 18 estados (aproximadamente un tercio de los consejos). La mayoría de los delegados fueron elegidos de forma democrática por sus constituyentes regionales. Para un resumen de esta asamblea, ver *El Día*, 31-viii-84. Para análisis posteriores y estudios acerca de los consejos, ver Fox, 1986, 1988.

⁴¹ El retiro inesperado del acceso a sus camiones hecho por la CONASUPO a los consejos, conjuntamente con la falta de experiencia en administración, condujo a un eventual colapso de la alternativa de distribución. El éxito temprano, si bien poco duradero de los consejos de Oaxaca en la distribución de fertilizantes los obligaron a tener una responsabilidad mayor frente a sus clientes, por lo menos a corto plazo.

tuvo un gran impacto porque permitió la organización campesina democrática y relativamente autónoma a nivel *regional*, por primera vez, en una minoría de áreas dependientes del programa (por ejemplo, almacenes).⁴²

ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS DE PRODUCTORES

Aquellos grupos que fueron capaces de cambiar de enfoque, de una insistencia por la redistribución de la tierra en el periodo de Echeverría a una búsqueda de su identidad como productores o consumidores, ganaron algún terreno de acción durante el *boom* petrolero. Este cambio facilitó el acceso a la legitimidad política y los recursos del gobierno, aunque este acceso se lograba muchas veces a través de la movilización de masas para defender la autonomía de los grupos, o a expensas de dicha autonomía. Esta lucha por "autonomía dentro del sistema", llevó a la consolidación de un nuevo género de organizaciones económicas de orígenes agrarios, y con dirección campesina. Sus identificaciones políticas iban desde aquellas que eran independientes del gobierno por principio, pasando por las que no tenían nexos oficiales pero estaban dispuestos a "comerciar" su apoyo político a los funcionarios oficiales o candidatos en determinados espacios de tiempo para obtener concesiones concretas, hasta aquellas que eran oficiales nominalmente pero que rechazaban la intervención gubernamental en sus asuntos internos en un esfuerzo por representar los intereses económicos de sus miembros.

Con el periodo del SAM (1980-1982) se dio un cambio hacia el suministro de más recursos a la agricultura en general y una tolerancia mayor para las iniciativas de productores autónomos en particular, lo que creó un ambiente propicio para la consolidación de las uniones de ejidos (UE). Una encuesta nacional patrocinada por DICONSA mostró que para 1981, 237 uniones de ejidos funcionaban realmente, representando a más de 4 700 ejidos y comunidades agrarias: cerca del

⁴² De forma impresionante, la distribución de alimentos en el campo por parte del gobierno creció en importancia relativa aun antes de que los subsidios de alimentos urbanos se rebajaran en 1981 de 10.5% de las ventas de DICONSA en 1978, a 20% en 1981 y 29% en 1985 (DICONSA, 1986: 21). Hasta para los tecnócratas, el programa tenía una eficiencia relativa; a diferencia de la mayoría de los subsidios alimentarios urbanos tradicionales, estaba destinado claramente a aquellos que más lo necesitaban. Para el punto de vista de un político acerca de las políticas de gastos en el campo, ver Salinas de Gortari, 1982, 1984.

20% del total (Fernández y Rello, 1984: 12).⁴³ Se supo que más de un tercio de uniones de ejidos se fundaron por iniciativa propia de sus miembros, sin promoción gubernamental (1984: 10). En términos de afiliación política, 30% declaró que ellos *no* pertenecían a ninguna federación campesina oficial, lo que indicaba un cambio cualitativo hacia una mayor independencia de los controles tradicionales del gobierno (1985: 25). De forma similar, una minoría significativa de las uniones de ejidos sometidas a la encuesta informaron tener una descentralización relativa en los procesos formales para la toma de decisiones: 36% que tomaba las decisiones en asambleas generales de los miembros de la comunidad; 35% en asambleas de delegados de la comunidad; 12% en una junta elegida, y 11% en grupos más pequeños de líderes (1984: 55). Los resultados de esta encuesta sugieren de manera clara que para principios de los ochentas, el "sector social" rural incluía a una minoría importante de organizaciones económicas con democracia y autonomía relativa.

La creciente consolidación de las organizaciones económicas de dirección campesina fue tanto la causa como el efecto del cambio en el centro de gravedad de la forma de organización campesina: de federaciones centralizadas "verticales" a formas más "horizontales". La expresión novedosa y más importante de este cambio fue el surgimiento de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), a principios de los ochentas. Al igual que la CNPA, la UNORCA unía a diversos y distintos grupos sobre la base de demandas y acciones comunes, sin comprometer la autonomía de ningún grupo.

La UNORCA comenzó a aliarse a la Coalición de Ejidos Colectivos en los Valles de Yaqui y Mayo (CECVYM), la cual representaba a los beneficiados con la redistribución de tierras ordenada por Echeverría a última hora en Sonora. Estos beneficiados recibieron la tierra, pero muy pronto tuvieron que enfrentar toda una formación de agencias del gobierno aliadas con los dueños, lo que ocasionó varios años de lucha por crear su propio crédito, el seguro para sus cosechas y la capacidad de comercio. Para finales de los setentas, el CECVYM demostró que era posible combinar democracia política, igualdad social y eficiencia económica a gran escala. Su habilidad para incrementar en 5% la cosecha de trigo a nivel nacional, colectivamente y con más

⁴³ Según la Secretaría de la Reforma Agraria, para 1984 se habían formado 428 uniones de ejidos.

eficiencia que los antiguos propietarios, representó un serio desafío a la teoría dominante en el gobierno y el sector privado que responsabilizaba a la reforma agraria por el déficit alimentario en México.⁴⁴

Las reuniones nacionales campesinas que crearon a la UNORCA, al principio comenzaron por las celebraciones del aniversario de la redistribución de tierras hechas por el CECVYM. Ya en la Quinta Asamblea Nacional de Organizaciones Campesinas celebrada en agosto de 1984 en Oaxaca, 52 organizaciones regionales de 32 estados habían asistido, por lo menos, a dos de dichas reuniones (*El Día*, 18-vii-84). Los acuerdos alcanzados giraban en torno a una táctica para incrementar el poder de negociación de los productores, combinando la movilización con la negociación. Basada en la experiencia del CECVYM, la táctica se centraba en bloquear los mecanismos que extraían la plusvalía del campesino. El esfuerzo por cambiar los términos de comercio de los productores campesinos con el mercado pretendía aumentar el control autónomo sobre tres aspectos fundamentales en el proceso de producción: crédito, asistencia técnica y mercado. El componente clave para esta estrategia lo serían las uniones de ejidos democratizadas y la interrogante fundamental era si éstas servirían al ejido o viceversa. Si muchas uniones de ejidos extraían recursos de los productores para apoyar nuevas entidades burocráticas, la alternativa para aquellas uniones de ejidos movilizadas era usar sus poderes de negociación y economías de escala para capitalizar a sus ejidos miembros (Gordillo, 1980, 1986, 1987).

Las nuevas formas más importantes de movilización se concentraron en reducir el creciente distanciamiento entre los gastos de producción regulados por el gobierno y sus precios oficiales de ayuda a las cosechas. A partir de la crisis económica de 1982, las organizaciones regionales relacionadas con la UNORCA desempeñaron papeles fundamentales en la creación de coaliciones horizontales que agruparon a organizaciones oficiales e independientes sobre la base de intereses comunes; en muchos casos por primera vez. Entre 1983 y 1987, surgen los movimientos de precios más importantes, fundamentalmente en el trigo, el maíz y el frijol de soya. Las principales tácticas incluyeron la ocupación pacífica de docenas de almacenes del gobierno así como también marchas y bloqueo de carreteras.⁴⁵

⁴⁴ Para más datos acerca de la coalición, ver CECVYM, 1982.

⁴⁵ Para comentarios, ver *El Día*, 18-v-85, 2-xi-85. La ocupación de los almacenes de la CONASUPO es una táctica de bajo riesgo, relativamente. Puesto que la misión institucional

La ola de protestas por los precios del maíz a principios de 1986 mostró la forma de actuar dentro de un marco regional para alcanzar un resultado. Las protestas estallaron en Chihuahua cuando La Alianza Campesina del Noreste afiliada a la UNORCA dirigió a 2 000 campesinos para que impidieran el traslado del maíz de los almacenes de CONASUPO. El movimiento se extendió rápidamente a la parte sur del estado cuando más de 20 000 campesinos de diversas organizaciones oficiales se aliaron al Movimiento Democrático Campesino de Chihuahua (MDC). El movimiento unió a campesinos simpatizantes con partidos de izquierda, de centro y de derecha, y 99 almacenes fueron ocupados sin empleo de la violencia. La cercana elección gubernamental, candente como estaba, descartó una respuesta coercitiva incrementando así, en gran medida, el papel negociador de los productores y provocando la intervención federal a su favor.⁴⁶

El movimiento de Chihuahua también se extendió rápidamente a otros estados, los más notables: Nayarit y Chiapas. El movimiento en Nayarit estuvo bajo la dirección de la Unión de Ejidos "Lázaro Cárdenas" y una federación regional afiliada a la UNORCA la cual, al igual que la ACN, combinaba la acción directa (más de 3 000 campesinos ocuparon doce almacenes) con tácticas flexibles de negociación, incluida la voluntad de aceptar concesiones sin precios.⁴⁷ En Nayarit no se aproximaban las elecciones y los productores clamaban sólo por un incremento pequeño combinando inversiones en especies y en efectivo.

A diferencia de Nayarit, en Chiapas la protesta por los precios del maíz la dirigió un antiguo legislador federal que desertó de la CNC. Su sostenida rivalidad con el gobernador, así como su aparente deserción, agudizaron la bien conocida tendencia de las autoridades estata-

de CONASUPO es promover los intereses campesinos, se le tiene prohibido usar la fuerza para desalojar a quienes protestan. Más aún, como parte del período reformista en el gobierno de Echeverría, a los administradores rurales de los almacenes los elegían los beneficiarios de la reforma agraria de la comunidad; una política que estimuló la responsabilidad local y dio oportunidades de empleo y capacitación a los hijos de los ejidatarios sin tierras. Estos administradores, por tanto, no estaban en contra de que la comunidad tuviera posesiones, a pesar de pertenecer a CONASUPO.

⁴⁶ Para un resumen sobre el movimiento por uno de sus líderes, ver *El Día*, 19-i-86, y *Proceso* 13-i-86. Los negociadores informaron que la Secretaría de Planeación y Presupuesto conjuntamente con otras secretarías autorizaron un incremento en los precios de 53 000 pesos mexicanos a 65 000 pesos para los cultivadores de Chihuahua.

⁴⁷ Para una historia del movimiento por uno de sus líderes, ver *El Día* 22-ix-84. Los informes sobre las manifestaciones de 1986 aparecen en *La Jornada*, 13-i-86, 21-i-86.

les de responder a virtualmente todos los movimientos sociales con la fuerza bruta. La ocupación de 54 almacenes de CONASUPO por parte de 30 000 campesinos no produjo concesiones. El movimiento aumentó sus tácticas y 5 000 campesinos bloquearon la carretera panamericana. La policía estatal y soldados del ejército reprimieron violentamente esta acción.⁴⁸ Si bien el gobierno federal plantea que el precio oficial de apoyo se determina basado estrictamente en criterios tecnoeconómicos, los heterogéneos resultados de las protestas por los precios de maíz en 1986 indican que la dinámica de la política regional puede ser decisiva.

Puesto que tanto los pequeños como grandes productores comparten un interés común, las protestas por los precios se prestan claramente para alianzas multclasistas. En por lo menos tres de los movimientos de 1986-1987, la presencia de grandes y medianos productores, así como de intermediarios, provocó que los líderes del movimiento campesino comenzaran a buscar alternativas políticas. Económicamente, el gobierno había limitado los recursos con los cuales hacía concesiones y los grandes productores podían fácilmente dejar de consumir una parte desproporcionada si los mecanismos de compensación no se creaban para beneficios claves de los pequeños productores.⁴⁹ Políticamente, los líderes campesinos se arriesgaban a perder la dirección de las protestas frente a los grandes productores y los intereses especulativos. La principal respuesta ha sido, por tanto, intentar reforzar los lazos horizontales entre grupos de pequeños accionistas en la escena política.

INICIATIVAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO RURAL

Algunas de las protestas por los precios se han convertido en movimientos para un control más apropiado del propio proceso de producción. La Unión Nacional de Productores del Barbasco (UNPB), afiliada a

⁴⁸ Ver *La Jornada*, 18-1-86. Los líderes y simpatizantes de este movimiento, incluidos un periodista y profesores activistas, fueron encarcelados hasta marzo del 88. Amnistía Internacional los consideró "prisioneros por sus convicciones". Para un testimonio periodístico, ver Hernández Aguilar, 1986.

⁴⁹ Debe tenerse en cuenta que a nivel nacional, un estimado del 56% de los productores están por debajo de las condiciones de subsistencia, lo que indica que, como consumidores netos, éstos tienen mucho más en común con los desposeídos que con los grandes productores (CEPAL, 1982: 14). Sin embargo, para muchos campesinos en condiciones de subsistencia, su objetivo principal puede ser el de convertirse en productores independientes.

la CNC representa uno de los casos más importantes, con más de 35 000 miembros en siete estados. Al barbasco, una planta, la recolecta y procesa una empresa estatal para convertirla en producto farmacéutico (Gereffi, 1983). La UNPB comenzó a protestar por las importaciones ilimitadas desde China, lo que ocasionaba una caída de precio. Después de bloquear futuras importaciones, la UNPB logró quitarle a la empresa estatal irresponsable el control de la recolección y la etapa inicial del procesamiento de la planta, y empezó a negociar directamente con los compradores de la corporación transnacional. La UNPB creó entonces la ARIC "Libertad" para dirigir el procesamiento y el comercio, y rápidamente se diversificó en cítricos, café y granos. La ARIC "Libertad" ha trabajado conjuntamente con la UNORCA y muestra cuán grande puede ser la actividad económica que unas bases de autonomía relativa pueden crear dentro del movimiento campesino oficial (*El Día*, 16-IX-85, 23-XI-85).

Las nuevas prioridades y formas de lucha del movimiento campesino también han incluido un esfuerzo por reorientar los programas de viviendas del gobierno hacia las necesidades rurales. El CECVYM de Sonora organizó el primer proyecto de viviendas rurales a gran escala y de autodirección en México, construyendo 7 500 unidades habitacionales. Por vez primera, se persuadió a la agencia de viviendas del gobierno, que tenía una renta muy baja, para que financiara la construcción de viviendas dirigidas por los campesinos o programas de mejoras en otros estados, la mayoría organizados por afiliados a UNORCA. A diferencia del enfoque de "bienestar" que se le venía dando, la estrategia de UNORCA para la construcción de viviendas era peculiar, porque veía el programa de viviendas como un camino para la creación de empleos con el fin de fortalecer la capacitación de dirección y organizativa, y de capitalizar las firmas de contratos de materiales y de construcción en autodirección, que pudiera sobrevivir más allá de concluido el programa.

Desde que se puso fin a los grandes préstamos oficiales subsidiados para las cosechas a principios de los ochentas, el alto costo del crédito, unido a la ineficiencia del gobierno ha llevado a las organizaciones campesinas a abandonar la agricultura o a crear sus propias alternativas de financiamiento.⁵⁰ Unido a las olas de protestas por los precios

⁵⁰ Para discusiones generales sobre la política gubernamental de créditos a la agricultura, ver Fox, 1986 y Pessah, 1987. Para estudios importantes del crédito agrícola como instrumento de control político y abuso burocrático, ver Aguilar y Araujo, 1985 y Rello 1986.

ocurridas después de 1983, el movimiento de sindicatos con dirección campesina del crédito ha tomado fuerza.⁵¹

LA ECOLOGÍA Y LAS POBLACIONES LOCALES E INDÍGENAS: SUS DERECHOS DEMOCRÁTICOS

Las nuevas formas de lucha por autonomía local en el México rural trascienden las demandas y formas de identidad tradicionalmente asociadas a los campesinos, incluyendo las luchas por los derechos ecológicos, la democratización municipal y la legitimidad de las formas autónomas de expresión política de la población indígena.⁵²

El movimiento por los derechos ecológicos se desarrolló en dos direcciones interrelacionadas: por el control local de los recursos naturales (fundamentalmente el agua, los recursos forestales, y especies marinas), y contra la contaminación (particularmente la que provocan las industrias, en su mayoría propiedad del gobierno). Uno de los movimientos más notables y recientes por la defensa del medio ambiente estuvo dirigido por la Unión de Ejidos "Felipe Angeles", cuando se descubrió que el agua potable de la región de La Laguna estaba contaminada con arsénico (*La Jornada*, 27-ii-86, 8-iv-86). Pocos movimientos campesinos han ganado demandas ecológicas sin la ayuda de aliados, aunque las protestas permanentes en contra de la contaminación producida por la industria petrolera en el estado de Tabasco es una excepción (*El Día*, 7-vii-84; Barreto y Mota, 1983). La población indígena en alianza con los campesinos, la industria turística y la inte-

⁵¹ En 1986, más de cuarenta uniones de ejidos de 18 estados, con más de 100 000 miembros, firmaron un acuerdo con las secretarías de Agricultura y Presupuesto, así como con la Universidad Nacional (UNAM), para crear y financiar planes para créditos regionales administrados por ellos. Los sindicatos con créditos reconocidos oficialmente podrían operar como bancos, generando recursos para la capitalización de control local y la asistencia técnica. Este proceso se desarrolló gradualmente, en un esfuerzo por aumentar la represión rural en la administración.

⁵² La igualdad genérica es muy baja en gran parte del campo mexicano. Pocas mujeres se han podido organizar más allá de los límites regionales, entre otros motivos porque las estructuras de la reforma agraria estatal excluyen a la mayoría de las mujeres. Muy pocas organizaciones campesinas, no importa su ideología, cuestionan la opresión de la mujer. La mayor parte de las mujeres que se convierten en líderes en la esfera "pública" emergen de culturas indígenas que defienden hasta cierto grado la autonomía genérica. Para una discusión de una peculiar conferencia nacional de mujeres campesinas convocada por la CNRA, ver *Equipo Pueblo*, "La lucha de la mujer campesina", en "¿Por qué luchan los campesinos?", *Cuadernos Campesinos*, núm. 3, 1987.

lectualidad urbana lograron en 1980 bloquear los planes para la construcción de un reactor nuclear a orillas del Lago Pátzcuaro. Recientemente, el movimiento contra la planta nuclear de Laguna Verde ha unido a diversos grupos sociales en Veracruz.⁵³

Los movimientos para la democratización municipal tradicionalmente han centrado su lucha en la defensa del derecho a elecciones libres y justas, así como por autonomía política local (López Monjarán, 1986; Martínez Assad, 1985, 1987). Los movimientos de democratización municipal más intensos y duraderos se han dado en las comunidades indígenas (Bailón, 1984). El caso de Juchitán, Oaxaca es el más conocido (Rubin, 1987). Los esfuerzos por la democratización, raramente crean alternativas de estrategias económicas, pero algunos de estos movimientos democratizadores han estado integrados en los años ochentas a varios experimentos novedosos para el desarrollo económico regional.⁵⁴

La opresión racial y la clasista convergen permanentemente para frustrar los esfuerzos de los indígenas por una autodirección de su economía. La violencia contra la población indígena por parte del sector público y privado es cualitativamente mayor que para la mayoría de la población según una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo; un estimado del 70% de las personas asesinadas últimamente por causas políticas eran en su mayoría indígenas de los estados de Oaxaca y Chiapas.⁵⁵ Sin embargo, dos acontecimientos polí-

⁵³ Sobre la crisis ecológica relacionada a la industria petrolera en el sureste, ver Toledo 1984. Para un estudio ecológico de los problemas alimenticios en México, ver Toledo y otros, 1985. Sobre política ambiental, ver también Barkin, 1988; Mumme y otros, 1988 y Redclift, 1981.

⁵⁴ Quizás el caso más importante se dió en Cuetzalan, Puebla, donde la Cooperativa Agrícola Regional "Tosepan Titataniske" ("venceremos" en nahuatl), representaba a 8 000 familias indígenas. Esta cooperativa, una de las más activas y exitosas de las organizaciones para el desarrollo económico rural en México, se aprovechó de las divisiones dentro del partido oficial para elegir al primer representante campesino en su historia, a la presidencia municipal, en 1987 (*La Jornada*, 20-ii-87, 21-ii-87). Para los antecedentes e historia de esta cooperativa ver *El Día*, 1-ix-84; León y Steffen, 1986; Masferrer Kan, 1986a, 1986b. La mayoría de los intentos para la democratización local en Oaxaca tuvieron una base étnica similar e independiente de los partidos políticos. Ver, por ejemplo, el caso de la Coalición de Municipalidades de Cuicatlán, (*El Día*, 25-viii-84). En la comunidad indígena de Alcozauca, Guerrero, una administración de tres periodos del rsum, organizó proyectos de desarrollo económico y ecológico de carácter innovador (*La Jornada*, 5-vi-87). En el norte, una administración del rsum en Ignacio Zaragoza, Chihuahua, que dirigió las protestas por los precios, organizó los proyectos de vivienda y crédito (*El Día*, 19-i-85).

⁵⁵ Para estudios detallados, ver Amnistía Internacional, 1986. Para un estudio más comprensivo de las políticas indígenas en México, ver Mejías Piferos y Sarmiento Silva, 1987.

ticos recientes indican posibilidades de cambio. Las alianzas entre fuerzas políticas con autonomía relativa dentro del partido oficial en el estado de Oaxaca y reformistas "modernizadores" a nivel nacional, provocaron un cambio brusco en la dirección del gobierno estatal. Un gobernador indígena de tendencia izquierdista subió al poder con el apoyo evidente de la mayoría de la población. Su gobernatura abrió las puertas a los muchos y poderosos movimientos socialdemocráticos del estado. Si bien estaba limitado en su capacidad para controlar la violencia caciquil, el gobernador creó una atmósfera adecuada para las luchas de los indígenas por la autodirección del desarrollo económico (*La Jornada*, 10-i-88). Otro cambio notable fue la dramática huelga de hambre frente a Palacio Nacional que obligó al presidente de la Madrid a reconocer por primera vez la legitimidad de las luchas indígenas contra la violencia de los caciques (*La Jornada*, 5-v-87).

CONCLUSIONES

El futuro del naciente sector social democrático es indefinido. El camino hacia la consolidación de fuerzas democráticas regionales de "contrapeso" está lleno de riesgos. La relativa independencia de una empresa rural del estado no presupone una democracia en la participación. Las instituciones, empresas y grupos de interés con autonomía relativa pueden, sin embargo, crear mayor espacio político para la movilización democrática que el existente en formas corporativistas de organización tradicional. Sin embargo, no está garantizada la responsabilidad de la dirección para las masas; esto depende más de un proceso de movilización de las masas que de las intenciones de la dirección. Allí donde los movimientos se caracterizan por demandas económicas primarias, el Estado con frecuencia retiene en sus manos la capacidad de movilización a través de determinadas concesiones. En las regiones particularmente violentas, los movimientos campesinos dependen fundamentalmente de sus aliados externos, tanto dentro como fuera del Estado, para controlar la represión.

Es importante recordar que aun cuando las organizaciones oficiales campesinas atraviesan por una crisis de representación y ya no pueden

Ver también, *México indígena y nueva antropología*, Ávila y Cervantes, 1986; Bonfil, 1984; Fuentes y Rossel, 1982; Sarmiento Silva, 1986; Stavenhagen, 1975, y Wasserstrom (1983).

manejar la continuidad de las demandas de tierra, y aun cuando las organizaciones independientes son con frecuencia más dinámicas, la *inmensa mayoría* de los campesinos organizados son todavía miembros de federaciones oficiales.⁵⁶ No obstante, los avances en la primera mitad de los años ochenta, tanto por y a pesar de la crisis económica, muestran las posibilidades para la existencia de un cambio, por lo menos para aquellos campesinos que puedan mantener las organizaciones democráticas regionales.

Si por un lado la actual crisis económica parece excluir cualquier expectativa de mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población rural en un futuro cercano, por otro lado, la lucha política puede cambiar la actual distribución de las condiciones entre los grupos sociales y las regiones. En este marco de referencia, existen tres factores claves que están cambiando gradualmente el panorama del movimiento campesino.

En primer lugar, los movimientos democráticos rurales han demostrado su capacidad para cambiar el *papel del ejido*; ya no lo ven simplemente como un órgano de control político, sino que plantean su carácter potencial como *representante de una institución político económica*. Este proceso ha girado fundamentalmente alrededor de iniciativas para el desarrollo rural y regional de carácter democrático, socavando el nexo tradicional entre control político y económico por parte del Estado. Estos esfuerzos por la autodirección de la capitalización han creado los cimientos de un "sector socialdemocrático" en el campo. Los resultados de estos esfuerzos dependen tanto de la combinación, como del fortalecimiento de las alianzas entre las agencias del gobierno y las élites del sector privado a nivel regional.⁵⁷

En segundo lugar, las fuerzas democráticas más importantes dentro del movimiento campesino están cambiando su táctica de organización tradicional pasando de los esfuerzos por crear una federación centralizada para la competencia, a la *ampliación de redes regionales con carácter pluralista*. A diferencia de los esfuerzos tradicionales de los partidos políticos urbanos por un control vertical, tanto UNORCA como la mayoría de los componentes de la CNPA hacen énfasis en el respeto de la autonomía política de cada grupo miembro, y cada gru-

⁵⁶ La CNC declaró, por ejemplo, que entregaría al candidato del PRI de 8 a 10 millones en las elecciones presidenciales de julio (*La Jornada* 2-ii-88).

⁵⁷ Para un estudio que hace énfasis en la variabilidad de los lazos del gobierno con las élites locales contra campesinos, ver INCA Rural, 1984.

po enfatiza la necesidad de redes de trabajo de composición horizontal entre las fuerzas democráticas dentro y fuera de las regiones.

En tercer lugar, las fuerzas democráticas en el movimiento campesino se han aferrado por mucho tiempo a la tendencia "oficial contra-independiente". Como demuestra la experiencia, un enfoque estatista puede a veces marginar a fuerzas independientes, hacerlas vulnerables a la represión y limitar las perspectivas de alianzas tácticas con elementos relativamente autónomos dentro de las federaciones oficiales. Como resultado, *ha surgido una nueva área política*, que facilita la convergencia de grupos nominalmente oficiales e independientes, como en los casos de los movimientos por los precios a los productores, y por los derechos de los consumidores.

Esta "nueva área" trae consigo al menos dos posibilidades. Quizás las fuerzas autónomas se acerquen cada vez más a un proceso de *concertación social* dirigido por el gobierno, ganando así oportunidades económicas y políticas reservadas sólo para pocos productores bien organizados o reconocidos. Alternativamente, las perspectivas de efectos políticos y económicos "multiplicadores" permanecen abiertas para la gran mayoría menos organizada, que ha dependido por mucho tiempo de la dirección política del movimiento campesino. ¿Pedirán los pequeños propietarios productores de plusvalía demandas que beneficien también a aquellos productores sin tierra? El movimiento campesino se encuentra en un proceso de cambio, y su rumbo futuro depende, en gran medida, de las decisiones estratégicas que tomen los líderes del movimiento rural, desenvolviéndose dentro de la mencionada "nueva área política". Si estos nuevos agentes regionales se movilizan para defender los intereses de la mayoría rural y para mantener la responsabilidad política del sistema, es posible que las crecientes fuerzas autónomas dentro de las federaciones oficiales hagan alianza con los movimientos independientes para crear un movimiento campesino revitalizado que vaya en busca de empleos, tierra y democratización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguado López, Eduardo, Torres, José Luis y Sherer Ibarra, Gabriela, "La lucha por la tierra en México (1976-1982)". *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, julio-diciembre, 1983, pp. 113-114.

- Aguilar, Samuel y Araujo, Hugo Andrés, *Estado y campesinado en la Laguna: la lucha campesina por la tierra y el excedente*. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, 1984.
- Aleántara, Sergio, "La capacidad de respuesta del campesinado mexicano". *Revista del México agrario*, enero de 1981.
- Amnesty International, *Mexico: Human Rights in Rural Areas, Exchange of Documents with the Mexican Government in Human Rights Violations in Oaxaca and Chiapas*. Al Publications, Londres, 1986.
- Appendini, Kirsten y Almeida Salles, V., "Precios de garantía y crisis agrícola". *Nueva antropología*, mayo de 1980.
- Astorga Lira, Enrique y Hardy, Clarisa, *Organización, lucha y dependencia económica, la Unión de Ejidos Emiliano Zapata*. Nueva Imagen/CIDER, México, 1978.
- Astorga Lira, Enrique, *Mercado de trabajo rural en México, La mercancía humana*. Era, México, 1985.
- Austin, James y Fox, Jonathan, "State-Owned Enterprises as Food Policy Implementors", en James Austin y Gustavo Esteva, eds., *Food Policy in Mexico: The Search for Self-Sufficiency*. Ithaca, Cornell University Press, 1987.
- Avila, Agustín y Cervantes, Alma, *Procesos de organización campesina en las Huastecas*. Facultad de Economía, UNAM/DICONSA, 1986.
- Bailón, Moisés Jaime, "Elecciones locales en Oaxaca en 1980". *Nueva Antropología*, 25 de octubre de 1984.
- Barkin, David, "Environmental Degradation and Productive Transformation in Mexico: The Contradictions of Crisis Management". Presented at the Latin American Studies Association meetings, Nueva Orleans, marzo de 1988.
- Barkin, David y Dewalt, Billie, "La crisis alimentaria mexicana y el sorgo". *Problemas del desarrollo*, febrero de 1985.
- Barkin, David y Suárez, Blanca, *El fin de la autosuficiencia alimentaria*. Océano/CECODES, México, 1985.
- Bartra, Armando, ed., *Polémica sobre las clases sociales en el campo mexicano*. Macehual/Cuadernos Agrarios/UNAM, México, 1979.
- Bartra, Armando, "Crisis agraria y movimiento campesino en los setentas". *Cuadernos agrarios*, diciembre, 1980.
- , *Los herederos de Zapata, movimientos campesinos posrevolucionarios en México*. México, ERA, 1985.
- Bartra, Roger, y otros, *Caciquismo y poder político en el México rural*. Siglo XXI, México, 1975.
- Benítez Zenteno, Raúl, ed., *Sociedad y política en Oaxaca, 1980*. IIS, UABJO, Oaxaca, México, 1982.
- Medea, Benjamín, y Buell, Rebecca, "Coalition of Ejidos Report". *Research Report*, Institute for Food and Development Policy, 1985.
- Boltvinik, Julio y Pessah, Raúl, "La asignación de recursos públicos a la agricultura en México, 1959-1976". CEPAL/MEX/SAC/73, mimeo, 10-II-81.

- Bonfil, Guillermo, "El Estado, indigenismo y los indios", en Jorge Alonso, ed. *El Estado mexicano. Nueva Imagen/CIESAS*, México, 1982.
- Briseño, Juan, "Migración y violencia en la huasteca hidalgüense". *México indígena*, núm. 13, noviembre-diciembre 1986.
- Camahji, Arturo, "No todo en el campo es orégano, panorama de la lucha campesina 1977-1978", *Nexos*, núm. 14, febrero de 1979.
- Canabal, Beatriz, *Hoy luchamos por la tierra...* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 1984.
- Cartas Contreras, Celso, "Contributions of the Agricultural Sector to the Import Subsisting Process in Mexico", en Bruce Hohnston, Cassio Luiselli y Clark Reynolds, eds., *The United State and Mexico: Agriculture and Rural Development*, Standford University Press, Standford, 1988.
- Castell Cancino, Jorge y Rello, Fernando, "Las desventuras de un proyecto agrario: 1970-1976", en Rolando Cordera, ed. *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*. Fondo de Cultura Económica, México, 1981.
- CENAC, "Impacto del crédito oficial en la producción y productividad del maíz". Centro Nacional de Capacitación del sistema de Crédito Rural, México, 1980, mimeo, publicado por INCA-Rural en 1984).
- CEPAL, "Caracterización de la política agrícola mexicana en diferentes periodos de los años veinte a los años setenta". CEPAL/MEX 1052, 26-VI-81, mimeo.
- , *Economía campesina y agricultura empresarial*. Siglo XXI, México, 1982.
- Cernea, Michael, "A Social Methodology for Community Participation in Local Investment: The Experience of Mexico's PIDER program". *World Bank Staff Working Paper*, núm. 598, agosto de 1983.
- Cesar Dachary, Alfredo, *Producción colectiva y desarrollo capitalista en el agro mexicano (1970-1980)*. CEDLA, Amsterdam, 1987.
- Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo, "En defensa del ejido". CEESTEM/SMP, México, 1982.
- , "Ponencia (untitled)". Presentada en la Jornada Nacional de Defensa del Ejido, México, 5-8 de agosto, 1982.
- Collin, Laura, y Félix Báez, Jorge, "La participación política y los grupos étnicos en México". *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, julio de 1979.
- Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, "Documentos". *Textual*, diciembre de 1982.
- Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA), "Campesinos en lucha". CNPA/ANEPA, 1985.
- Córdova, Arnaldo, *La política de masas del cardenismo*. ERA, México, 1974.
- , "El poder del Estado". *Economía Informa*, núm. 109, octubre de 1983.
- Cornelius, Wayne, "Nation Building, Participation, and Distribution: The politics of social Reform Under Cardenas", en Gabriel Almond, y otros, eds., *Crisis, Choice and Change: Historical Studies of Political Development*, Little Brown, Boston, 1973.
- , "Contemporary Mexico: A Structural Analysis of Urban Caciquismo",

- en Kern, Robert, ed., *The Caciques, Oligarchical Politics and the System of Caciquismo in the Luso-Hispanic World*, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1973.
- , "Leaders, Followers and Oficial Patrons in Urban Mexico", en Hellen Schmidt, y otros, eds., *Friends, Followers and Factions, A Reader in Political Clientelism*, University of California Press, Berkeley, 1977.
- De Grammont, Hubert, ed., *Asalariados agrícolas y sindicalismo en el campo mexicano*. Juan Pablos, México, 1986.
- Del Conde, Leticia y Zamora, Marcelina, "Cronología del movimiento campesino en México: marzo y junio de 1984". CEHAM, núms. 14-15, febrero de 1985.
- DeWalt, Billie, "Mexico's Second Green Revolution". *Mexico Studies*, Instituto Mexicanos, invierno de 1985.
- Díaz Cisneros, Heliodoro y Feltehausen, Herman, "La Efectividad de los elementos de la estrategia del Plan Puebla en el desarrollo, 1967-1985". Centro de Estudios del Desarrollo Rural/Centro de Enseñanza, Investigación y Capacitación para el Desarrollo Regional, Colegio de Posgraduados, Chapingo, 1985, mimeo.
- DICONSA, "Evolución del sistema de distribuidoras CONASUPO 1983-1985 y líneas centrales del programa 1986". DICONSA, México, abril de 1986.
- DGEA (Dirección General de Economía Agrícola/SARH), "Determinación de los precios de garantía para los productos del campo". *Econotécnica agrícola*, noviembre de 1982.
- Durán, Evelyne, Fernández, Ma. Teresa, Siquin, Evelyne, Gil, Javier y Magaña, Pedro, Los productores rurales y sus problemas en el occidente de México núm. 3, Facultad de Economía, UNAM/DICONSA, México, 1986.
- Encinas, Alejandro y Rascón, Fernando, *Reporte y cronología del movimiento campesino e indígena: 1982*, 2 vols., Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1983.
- Equipo Pueblo, "¿Por qué luchan los campesinos?". *Cuadernos Campesinos*, núms. 2 y 3, 1987.
- Equipo Pueblo/Instituto Maya, "Un paso más, producción, comercialización, abasto", octubre de 1987.
- Esman, Milton y Uphoff, Norman, *Local Organizations, Intermediaries in Rural Development*. Cornell University Press, Ithaca, 1984.
- Esteva, Gustavo, "La experiencia de la intervención estatal reguladora en la comercialización agropecuaria de 1970 a 1976", en Ursula Oswald, ed., *Mercado y Dependencia*, Nueva Imagen/CIS-INAH, México, 1979.
- , *La batalla en el México rural*. Siglo XXI, México, 1980.
- , "Las transnacionales y el taco", en Rodolfo Echeverría Zuno, ed., *Transnacionales, agricultura y alimentación*. Nueva Imagen/CNE, México, 1982.
- , *The Struggle for Rural Mexico*. Bergin and Garvey, South Hadley, 1983.
- Esteva, Gustavo y Gordillo, Gustavo, "Programa Nacional de Alimentación: ¿alternativa o demagogia?". *Textual*, diciembre de 1983.

- Falcón Romana, *El agrarismo en Veracruz, la etapa radical (1928-1935)*. El Colegio de México, México, 1977.
- Felstehausen, Herman y Díaz Cisneros, Heliodoro, "The Strategy of Rural Development: The Puebla Initiative". *Human Organization*, abril de 1985.
- Fernández, Luis y Tarro Garca, Mara, *Ganadería y estructura agraria en Chiapas*. UAM-Xochimilco, México, 1983.
- Fernández, María Teresa y Rello, Fernando, *La organización de productores en México*. DICONSA, México, 1984.
- Fox Jonathan, "The Political Dynamics of Reform: The Case of the Mexican Food System". Doctoral Dissertation, MIT, Dept. of Political Science, mayo, 1986.
- , "Grassroots Organizations vs. 'The Iron Law of Oligarchy': Reflections on a Research Agenda". Presentado en Cambridge University, Seminario "Local Leaders, Community Development and participation", octubre de 1987, mimeo.
- , "Popular participation and Access to food: Mexico's Community Food Councils, 1979-1985", en Scott Whiteford and Ann Ferguson, eds., *Food Security and Hunger in Central America and Mexico*. Westview Press, Boulder, 1988.
- Fuentes, Jorge y Rossel, Esther, *La comunidad campesina, La organización política de los pueblos en la meseta tarasca*. IMISAC, Morelia, 1982.
- Geroffi, Gary, *The Pharmaceutical Industry and Dependency in the Third World*. Princeton University Press, Princeton, 1983.
- Gómez Tagle, Silvia, "La reforma política en México y el problema de la representación política de las clases sociales", en Jorge Alonso, ed., *El Estado mexicano*. Nueva Imagen/CEASA, México, 1982.
- , "Estado y reforma política en México: interpretaciones alternativas". *Nueva Antropología*, octubre de 1984.
- Goñezjara, Francisco, *Bonapartismo y lucha campesina en la costa grande de Guerrero*. Ed. Posada, México, 1979.
- González Rodríguez, Oscar, "La economía política de la estructura agraria mexicana". *Comercio Exterior*, diciembre de 1977.
- González Navarro, Moisés, *La CNC en la Reforma Agraria* (3a. ed.). *El Día* en Libros, México, 1985.
- Gordillo, Gustavo, "Estado y sistema ejidal". *Cuadernos Políticos*, núm. 21, julio de 1979.
- , "Pasado y presente del movimiento campesino en México". *Cuadernos Políticos*, núm. 23, enero de 1980.
- , "Programa de reformas para el sistema ejidal". *Cuadernos Políticos*, núm. 33, julio, 1982.
- , "La alianza del movimiento campesino con el Estado". *El Día*, 15, 16, 17, 18, 19-vii-85.
- , "Estado y movimiento campesino en la coyuntura actual", en Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín, eds., *México ante la crisis*. Siglo XXI, México, 1985.

- , "Movilización social como medio de producción". *Investigación Económica*, núm. 175, enero-marzo de 1986.
- , "El movimiento campesino en la década de los ochentas", *Siempre!* (suplemento cultural), núm. 1296, 4 de febrero de 1987.
- , *Unos campesinos al asalto del cielo* (La experiencia de los ejidos colectivos en los valles del Yaqui y del Mayo). Siglo XXI, México, 1988.
- Gordillo, Gustavo y Rello, Fernando, "El campo mexicano a la hora de la sequía". *Nexos*, núm. 32, agosto de 1980.
- Grindle, Merilee, Bueacrats, *Politicians and Peasants in Mexico*. University of California Press, Berkeley, 1977.
- , "Official Interpretations of Rural Underdevelopment: Mexico in the 1970s". *Working Papers in U. S.-Mexican Studies*, núm. 20, 1981.
- , *Issues in U. S.-Mexican Agricultural Relations: A Binational Consultation*. Monograph Series, 8, Center for U. S.-Mexican Studies, UC-SD, La Jolla, 1983.
- , *Searching for Employment: Labor Migration and Employment in Rural Mexico*. Cornell University Press, Ithaca, 1988.
- Hall, Lana y Price, Turner, "Price Policies and the SAM, A Wheat-Maize Comparison". *Food Policy*, noviembre de 1984.
- Hardy, Clarisa, *El Estado y los campesinos*. Nueva Imagen/CEESTEM, México, 1984.
- Hernández Aguilar, Jorge Enrique, "En nombre del maíz". Equipo Pueblo, México, noviembre de 1986.
- Hewitt de Alcántara, Cynthia, *Modernizing Mexican Agriculture*. UNRISD, Ginebra, 1976.
- Huacuja Rountree, Mario, "La lucha por el SAM". *Nexos*, núm. 30, junio de 1980.
- INCA Rural, "Dinámica de la organización campesina y sus determinantes económicos". *Boletín de Investigación*, núm. 3, octubre de 1984.
- Krotz, Esteban, y otros, *Cooperativas agrarias y conflictos políticos en el sur de Jalisco*. UAM-Iztapalapa, Cuadernos Universitarios núm. 24, México, 1985.
- León, Arturo y Steffen, Cristina, *Estado y organizaciones en el altiplano central*, núm. 2, DICONSA/UNAM, México, 1986.
- Levy, Ignacio, "Los movimientos rurales en México y la Reforma Agraria: estudio de cuatro ejidos". *Revista Mexicana de Sociología*, julio de 1977.
- López Monjardín, Adriana, *La lucha por los ayuntamientos: una utopía viable*. Siglo XXI/HS, México, 1986.
- , "Organización y luchas de los obreros agrícolas en México". Presentado en el "Taller sobre los sindicatos, los trabajadores y el Estado en México", Universidad de California de San Diego, mayo de 1987.
- Luiselli, Cassio, "Agricultura y alimentación: premisas para una nueva estrategia", en Nora Lustig, ed., *Panorama y perspectivas de la economía mexicana*. Colegio de México, México, 1980.
- Luiselli, Cassio y Mariscal, Jaime, "La crisis agrícola a partir de 1965". En Ro-

- lando Cordera, ed., *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.
- Martínez Assad, Carlos, ed., *Municipios en conflicto*. IIS/UNAM, México, 1985.
- Martínez Assad, Carlos y Ziccardi, Alicia, "El municipio entre la sociedad y el Estado", *Mexican Studies/Estudios mexicanos*, verano de 1987.
- Masferrer Kan, Elio, "Tosepan titaniske (Unidos venceremos)". *México indígena*, núm. 11, julio-agosto de 1986.
- , "Coyotes y coyotitos. Cambios en los sistemas de intermediación en la sierra norte de Puebla", *México indígena*, núm. 12, septiembre-octubre de 1986.
- Mayo, Baloy, *La guerrilla de Genaro y Lucio, análisis y resultados*. Ed. Diógenes, México, 1980.
- Meissner, Frank, "The Mexican Food System (SAM), A Strategy for Sowing Petroleum". *Food Policy*, noviembre de 1981.
- Mejía Piñeros, María Consuelo y Sarmiento Silva, Sergio, *La lucha indígena: un reto a la ortodoxia*. Siglo XXI/IIS, México, 1987.
- Menéndez, Iván, *Inflación, devaluación y desarrollo rural en México*. Nueva Imagen/CEBSTEM, México, 1983.
- Middlebrook, Kevin, "Political Change and Political Reform in an Authoritarian Regime: The Case of Mexico". *Wilson Center Working Papers*, núm. 103, 1981.
- , "Political Liberalization in an Authoritarian Regime: The Case of Mexico", en Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule: Latin America*. Johns Hopkins, Baltimore, 1986.
- Montañez, Carlos, y otros, *El cultivo del maíz en México*. CECODES, México, 1982.
- Montañez, Carlos y Aburto, Horacio, *Maíz: política institucional y crisis agrícola*. Nueva Imagen/CIDER, México, 1979.
- Montañez Carlos y Warman, Arturo, *Los productores de maíz en México: restricciones y alternativas*, CECODES, México, 1985.
- Montes, Margarito, "El movimiento campesino en el México actual". *Textual*, diciembre de 1982.
- Montes, Carlos, "Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (FIOAC)". Universidad Autónoma de Puebla/CIC, n.d.c., 1985.
- Montes de Oca, Rosa Elena, "The State and the Peasants", en José Luis Reyna y Richard Weinert, eds., *Authoritarianism in Mexico*. IISH, Philadelphia, 1977.
- Mújica Vélez, Rubén, "El Sistema Alimentario Mexicano, los problemas estructurales". *Comercio Exterior*, abril de 1980.
- , "El sector agropecuario: crónica de una muerte anunciada". *Economía Informa*, núm. 113, febrero de 1984.
- Mumme, Stephen, C. Bath, Richard y Assetto, Valerie, "Political Development and Environmental Policy in Mexico". *Latin American Research Review*, 1988.
- Niño Edilberto, "Organización campesina: presión desde la base". Presentado en U. S.-Mexico Project Conference on Building Linkages Between Policymakers, Researchers and Small Farmers", Pátzcuaro, 3-8 de diciembre de 1985.

- Nolasco, Margarita, *Café y sociedad en México*. Centro de Ecodesarrollo, México, 1985.
- North, Liisa y Raby, David, "The Dynamic of Revolution and Counter-Revolution: Mexico Under Cárdenas, 1934-1940". *Laru-Studies* (Latin American Research Unit), octubre de 1977.
- Odile, Marie y Singer, Marion, *El movimiento campesino en Chiapas, 1983*. CEHAM, México, 1984.
- Palacios, Enrique, "La política hidroagrícola en México". CEPAL/MEX/SAC/70, 13-1-81, mimeo.
- Paoli, J. Antonio, "Caciquismo y control del PRI". En V. Amalia Muñoz Rocha, ed., *Jornada el campo y el campesino: producción y hambre*, UAM-Xochimilco, México, 1984.
- Paré, Luisa, *El proletariado agrícola en México, Siglo XXI*, México, 1977.
- , "La política agropecuaria, 1976-1982". *Cuadernos Políticos*, núm. 33, julio de 1982.
- , ed., *El Estado, los cañeros y la industria azucarera: 1940-1980*. UNAM/IIS, México, 1987.
- , con Irma Juárez G. y Gilda Salazar, *Caña brava* (Trabajo y organización social entre los cortadores de caña). UNAM, México, 1987.
- Pessah, Raúl, "Channeling Credit to the Countryside", en James Austin y Gustavo Esteva, eds., *Food Policy in Mexico: The Search for Self-Sufficiency*. Cornell, Ithaca, 1987.
- Rama, Ruth, "Some Effects of the Internationalization of Agriculture on the Mexican Agricultural Crisis". En Steven Sanderson, ed., *The Americas in the New International Division of Labor*, Holmes and Meier, New York, 1985.
- Rama, Ruth y Rello, Fernando, "La internacionalización de la agricultura mexicana", en Nora Lustig, ed., *Panorama y perspectiva de la economía mexicana*. Colegio de México, México, 1980.
- Ramos García, Héctor, y otros, *El movimiento campesino en Veracruz, Puebla y Tlaxcala*. Nueva Sociología, México, 1984.
- Redclift, Michael, "The New Sources of Environmental Conflicts in Rural Mexico". *Occasional Papers*, núm. 4, Department of Environmental Studies and Countryside Planning, University of London-Wye College, abril de 1981.
- , "The Mexican Food System (SAM), Sowing Subsidies, Reaping Apathy". *Food Policy*, noviembre de 1981.
- , "Development Policymaking in Mexico: The Sistema Alimentario Mexicano". *Working Paper in U. S.-Mexican Studies*, núm. 24, 1981.
- , "Production Programs for Small Farmers: Plan Puebla as Myth and Reality". *Economic Development and Cultural Change*, abril de 1983.
- Reig, Nicolás, "Las tendencias alimentarias a largo plazo en México: 1950-1984". *Problemas del desarrollo*, febrero de 1985.
- Rello, Fernando, "La política del Estado y la lucha campesina", en Jorge Alonso, ed., *El Estado mexicano*, Nueva Imagen-CIESAS, México, 1982.

- , *El campo en la encrucijada nacional*. 1986, mimeo.
- , *Bourgeoisie, Peasants and the State in Mexico: The Agrarian Conflict of 1976*. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Genova, 1986.
- , *State and Peasantry in Mexico: A Case Study of Rural Credit in La Laguna*. UNRISD, Genova, 1987.
- Reynolds, Clark, "Why Mexico's 'Stabilizing Development' Was Actually Destabilizing (With Some Implications for the Future)". *World Development*, núm. 6, 1978.
- Robles, Rosario, "Las organizaciones campesinas independientes en México", en Julio Moguel, ed., *Ensayos sobre la cuestión agraria y el campesinado*, Juan Pablos, México, 1981.
- Rodríguez Araujo, Octavio, "Reforma política: recuento y obituario". *Nexos*, núm. 42, junio de 1981.
- Roniger, Luis, "Caciquismo and Coronelismo: Contextual Dimensions of patron Brokerage in Mexico and Brazil". *Latin American Research Review*, 1987.
- Roxborough, Ian, *Unions and Politics in Mexico, The case of the Automobile Industry*. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.
- Rubin, Jeffrey, "State Policies, Leftist Oppositions and Municipal Elections: The Case of the COCEI in Juchitán", en Arturo Alvarado, ed., *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*. University of California, San Diego/Center for U. S.-Mexican Studies, Monograph 22, 1987.
- Rubio, Blanca, *Resistencia campesina y explotación rural en México*. Ediciones ERA, México, 1987.
- Rutsch, Mechthild, *La ganadería capitalista en México*. Editorial Línea/CIES, México, 1984.
- Salamini, Heather Fowler, *Agrarian Radicalism in Veracruz: 1920-1938*, University of Nebraska Press, Lincoln, 1978.
- Salinas de Gortari, Carlos, "Political Participation, Public Investment, and Support for the System: A Comparative Study of Rural Communities in Mexico". *Research Report Series*, núm. 35, Center for U. S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1982.
- , "Production and Participation in Rural Areas: Some Political Considerations", en Pedro Aspe y Paul Sigmund, eds., *The Political Economy of Income Distribution in Mexico*, Nueva York, 1984.

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO MEXICANO: UN APUNTE*

JESÚS REYES HERÓLES G. G.

La crisis económica de México ha modificado el sentido de lo urgente, cambiado la jerarquización de los propósitos y reorientado el ímpetu de la nación hacia ciertas tareas. Al mismo tiempo, la yuxtaposición de problemas ha hecho más difícil distinguir las acciones imprescindibles para reorientar la economía en el mediano y largo plazos, de aquellas más apremiantes para superar la crisis. Por su ubicación en el centro del quehacer del país, la problemática del sector agropecuario toca fibras sensibles, lo que dificulta incluso su análisis; además, por su cercanía con buena parte de la población nacional, en especial con los más necesitados, el tema se resiste a ser tratado con el lenguaje y la óptica fría, quizá distante, del discurso financiero.

Sin embargo, el problema perdura; es esencial encontrar mecanismos capaces de mantener —o probablemente incrementar— los recursos financieros con que cuenta el sector agropecuario, en el contexto de un uso racional de los recursos totales. En consecuencia, lo mismo que para otros sectores y actividades, no es razonable plantear esquemas de financiamiento que impliquen montos sustanciales de subsidios, mucho menos en aumento. De ahí que sea imprescindible hacer un esfuerzo mayor para establecer tácticas que finquen el desarrollo del sector en el mejor aprovechamiento de sus propias potencialidades.

En estos apuntes se presentan algunas reflexiones acerca de ese dile-

* Parte de este material se presentó en el Segundo Congreso Latinoamericano de Economía Agrícola, celebrado en México, D. F., en julio de 1987. El autor agradece a Samuel Reyes su ayuda en la preparación de este trabajo.